

Congreso de la Asociación Española de Historia Económica
Santiago de Compostela-Coruña-Vigo, septiembre de 2005

LA ECONOMIA DE LA GUERRA CIVIL

1. Introducción
2. Dos economías en guerra
3. La evolución de las macromagnitudes : la década de los treinta
4. Guerras civiles : Estados Unidos, México y Rusia
5. El coste económico de la guerra civil española

Pablo Martín Aceña
Universidad de Alcalá
31 de mayo, 2005

LA ECONOMIA DE LA GUERRA CIVIL

1. Introducción

La guerra civil ha sido, sin duda alguna, el acontecimiento histórico más importante de la España contemporánea y quién sabe si el más decisivo de su historia (¹). El Alzamiento militar se inició el 17 de julio, a las cinco de la tarde, y en menos de veinticuatro horas el país se encontraba en pleno fragor bélico y acorralado entre dos revoluciones violentas: una de derechas contra el régimen republicano constitucional y otra de izquierdas marxista-anarquista, igualmente contraria a la democracia que representaba la República. El comienzo en la misma jornada de una guerra y de dos revoluciones era más de lo que cualquier Estado podía soportar. Como ha puesto de relieve Burnett Bolloten (1997) en su monumental trabajo, la rebelión militar y la profundidad y el alcance de las revoluciones sociales significó de hecho la desaparición de la República democrática erigida en 1931.

Los antagonismos que provocaron el conflicto civil no surgieron repentinamente. Se habían ido acumulando poco a poco desde la caída de la Monarquía y la proclamación de la República y, con creciente intensidad, a partir de la victoria del Frente Popular. Basta recordar que en los meses transcurridos entre las elecciones de febrero y el golpe militar, el régimen experimentó, tanto en las ciudades como en el campo, una serie de conflictos laborales sin precedentes. El cambio de signo político lo quisieron aprovechar las organizaciones de izquierda y los sindicatos para reclamar la amnistía de los represaliados en la revolución de octubre de 1934, obligar a los patronos a readmitir a los despedidos y restablecer de inmediato la legislación republicano-socialista aprobada durante el primer bienio y que los gobiernos radical-cedista que siguieron habían suspendido. Además, desde el momento mismo del triunfo de los coaligados en el Frente, se desató una ofensiva popular que trastornó la normalidad de la vida política y ciudadana, alcanzando su punto culminante en los meses de mayo y junio cuando se declararon un sinnúmero de huelgas generales que pusieron en jaque al Gobierno y a las Cortes. Frente a este torbellino los poderes públicos no supieron reaccionar con energía (²). Como se afirma en el libro de Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox (1997), los militares, dirigidos por Franco, Sanjurjo, Mola y Queipo de Llano se sublevaron porque creían que la República era un régimen sin legitimidad política, porque creían que la autonomía de las regiones era una amenaza para la unidad de España, porque las huelgas y los desórdenes revelaban la falta de autoridad de la democracia y porque pensaban que la legislación de la República atacaba la esencia de la unidad católica de España. Los militares rebeldes creyeron que el golpe de Estado triunfaría de forma inmediata. Se equivocaron: desencadenaron una devastadora guerra civil de tres años.

En las semanas que siguieron a la sublevación militar los acontecimientos se sucedieron a velocidad de vértigo y las decisiones que se adoptaron en los meses de julio, agosto y septiembre determinaron el curso posterior y casi definitivo de la guerra. El territorio peninsular se escindió en dos mitades de parecida extensión y se formaron dos bandos ideológicamente antagónicos e irreconciliables. El avance de los generales rebeldes sobre Madrid, su objetivo prioritario, puso en jaque a las autoridades de la República y provocó la caída de varios gobiernos, incapaces de controlar la situación política y militar surgida tras el golpe de Estado. El conflicto se internacionalizó rápidamente: Hitler y Mussolini se alinearon con Franco y los autodenominados nacionales, mientras que Stalin, después de largas vacilaciones, decidió ayudar a la República; por su lado, las dos democracias occidentales,

¹. La apreciación es de Juan Benet (1999), p. 25.

². Sobre los orígenes y significado del Frente Popular lo mejor sigue siendo el libro de Santos Juliá (1979)

Francia y Gran Bretaña, buscaron un acuerdo paneuropeo para impedir que los "problemas" españoles desembocaran en una nueva guerra continental. En el plano económico, los tres meses del verano del 36 fueron desastrosos, con pérdidas en las cosechas, cierres de empresas, abandono de talleres y ocupaciones de fábricas; el sistema de transporte quedó paralizado en muchas ciudades, mientras que las operaciones de bancos y cajas de ahorro sufrían las consecuencias de la escisión del país.

Lo que hizo fracasar el golpe de Estado en las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, y sirvió para contener la rebelión en buena parte de la península fue la distribución de las armas, si bien esto mismo propició un levantamiento popular que provocó el colapso del Estado. El poder cayó en manos de las organizaciones políticas de izquierdas, PSOE, partido comunista, y de los sindicatos, UGT, CNT; como después recordaría Julián Zugazagoitia, ministro de la Gobernación en uno de los gabinetes de Juan Negrín, "el poder público, pulverizado, estaba en la calle, y un fragmento del mismo en las manos y a la disposición de cada ciudadano incorporado al antifascismo, que usaba de él a la manera que mejor cuadraba a su temperamento" ⁽³⁾.

En los ministerios se establecieron comisiones del Frente Popular para "ayudar y supervisar" a los ministros y funcionarios, privándoles de hecho de su legítima autoridad. La Administración se descompuso y la República se quedó sin milicia, sin policía y con su maquinaria institucional diezmada por las desertiones y el sabotaje. El "terror revolucionario" se enseñoreó de las zonas donde la rebelión fracasó. Diputaciones y ayuntamientos quedaron convertidos en esqueletos a los cuales se les escapó la vida. Los tribunales de justicia fueron sustituidos por comisiones revolucionarias que actuaban de acuerdo con sus propios criterios. El poder del Estado se fraccionó y dispersó en ciudades y pueblos entre los comités revolucionarios que tomaron el control de las oficinas de correos y telégrafos, las emisoras de radio y las comunicaciones telefónicas, organizaron las fuerzas de policía y los tribunales, las patrullas de carreteras fronterizas, los servicios de transporte y suministros, y crearon las milicias para los frentes de batalla. En el ámbito económico una extensa lista de pequeñas, medianas y grandes empresas fueron confiscadas o intervenidas y sus propietarios expulsados cuando no detenidos. En el campo, la colectivización rural se aplicó casi sin excepción en las grandes fincas, aunque también alcanzó a buen número de medianos y pequeños campesinos; incluso aquellos propietarios o arrendatarios que no vieron afectadas sus propiedades se sintieron amenazados ante el avance del frenesí revolucionario. Pero el caos político y social terminó por imponer una contundente leva. La actuación de los comités político-sindicales en las fábricas y empresas y las colectivizaciones de la tierra, provocaron un derrumbe colosal de la producción en la zona republicana del que difícilmente logró recuperarse: a finales de 1936 aparecieron serios problemas en el abastecimiento de cereales, escasearon las materias primas en los establecimientos fabriles y fallaron los suministros de energía.

En el autodenominado bando nacional, el curso de los acontecimientos fue bien distinto. Como ha señalado Tusell (1996), el predominio del elemento militar acabó pronto con la dispersión del poder político. El Ejército logró aglutinar desde las primeras semanas de la guerra a la pluralidad de fuerzas unidas a la sublevación –la derecha católica representada por la CEDA, la extrema derecha monárquica, los tradicionalistas, la Falange. Carentes de un programa político, pero con el objetivo prioritario y absoluto de obtener una rápida victoria militar, los generales concentraron en sus manos todo el poder del Estado. El rechazo a la

³. Julián Zugazagoitia, (1977), p. 47

República y el objetivo de la victoria militar, por encima de cualquier otra consideración, se convirtió en el elemento cohesivo de todas las fuerzas integradas en el Movimiento.

La muerte de Sanjurjo el 20 de julio de 1936, a quien los conspiradores habían atribuido la condición de cabeza de la sublevación, precipitó la constitución de la Junta de Defensa Nacional, primer paso de la evolución política en el bando sublevado hacia la configuración de un mando político y militar unificado. En septiembre se tomó la decisión de encargar a Franco la dirección de las operaciones bélicas y en el mes de octubre se formó en Burgos la Junta Técnica del Estado, al mando de Fidel Dávila, de la cual dependían una serie de comisiones administrativas responsables de las funciones del Estado. Instituciones complementarias fueron un gobernador general, encargado de nombrar las autoridades civiles, un Alto Tribunal de Justicia Militar, presidido por el general Jordana (en Valladolid) y una inspección General del Ejército. El verdadero poder residía, no obstante, en el Cuartel General de Franco en Salamanca.

Tusell sostiene que cuando a comienzos de 1937 se desvanecieron de manera definitiva las esperanzas de una guerra corta, los militares conscientes de que el destino final de la contienda dependía del mantenimiento de la unidad en su zona y de que todos los esfuerzos debían concentrarse en la situación militar, procedieron a organizar el aparato del Estado en su zona. La unificación de las distintas fuerzas políticas, monárquicos, tradicionalistas, falangista, se llevó a cabo en el mes de abril. Y en el mes de junio, tras la muerte accidental de Mola, se produjo la remodelación de la Junta Técnica, con Jordana al frente, un buen organizador, monárquico y reservado. El paso definitivo fue con el nombramiento de Franco para la Jefatura del Estado y la formación del primer Gobierno nacional. Las responsabilidades económicas recayeron, Hacienda y Obras Públicas, en dos monárquicos (Amado y Peña Boeuf), Industria, en un militar (Suanzes) y Agricultura, en un falangista (Fernández Cuesta). Por lo que se refiere a la economía, lo más parecido a una declaración programática (político-institucional) la encontramos en el Fuero del Trabajo, del cual se derivaba una concepción de la economía nacionalista e intervencionista que tenía poco que ver con el capitalismo liberal y que consideraba “la producción nacional como una unidad económica al servicio de la Patria”.

La internacionalización de la guerra civil también fue un elemento que surgió desde su mismo comienzo. En las cancillerías occidentales nada de lo que ocurría en Madrid o en otras capitales de la Península pasó desapercibido. A los gobiernos de París y de Londres, el golpe militar les planteó un grave dilema, obligándoles a buscar una postura conjunta para impedir que la lucha en la península Ibérica rompiera el frágil equilibrio sobre el que se asentaba la paz en Europa. Washington tampoco pudo desentenderse de lo que pasaba en España, pues el estallido de la guerra tuvo una enorme repercusión en la prensa y tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado se recibieron multitud de expedientes solicitando licencias para exportar armas a España. En Moscú, sin apenas relaciones diplomáticas o comerciales con Madrid, también se vieron forzados a ocuparse de los asuntos españoles, pues el Kremlin no podía volver la espalda a una revolución proletaria en ascenso, sin que su prestigio como líder de los trabajadores sufriera un serio revés. Y en Berlín, Roma y Lisboa, cuando se aseguraron del signo autoritario y anticomunista del golpe de Estado, no dudaron en inclinarse a favor de los generales rebeldes, prestándoles apoyo diplomático, económico y militar ⁽⁴⁾.

⁴. Para una visión de conjunto de los aspectos internacionales sigue siendo de gran utilidad el libro de Schwartz (1999); sobre la política francesa, Avilés (1994); lo relativo a la política del Reino Unido, Moradiellos (1996)

2. Dos economías en guerra ⁽⁵⁾

“No se concibe una guerra moderna sin su propia y gigantesca máquina económica. Se trata, al fin, de un Estado dentro del Estado. La organización, los aprovisionamientos y los medios necesarios durante el conflicto bélico, recaban una verdadera planificación en el orden presupuestario o, si se quiere, una especial organización de la economía pública” ⁽⁶⁾. Los dos bandos contendientes encararon la asignación de los recursos productivos de forma muy distinta: dispersa y desorganizada en el bando republicano, centralizada y disciplinada en el bando nacional. En aquél, el caos económico y financiero fue la tónica durante los primeros meses, hasta la llegada de Juan Negrín al Ministerio de Hacienda; luego la situación mejoró, pero siguieron subsistiendo graves problemas de coordinación y dirección; y cuando él mismo se hizo cargo de la Jefatura del Gobierno sustituyendo a en octubre de 1937 Largo Caballero, aunque imprimió un nuevo giro en la orientación de los recursos hacia fines bélicos y forzó una mayor centralización de las decisiones, el desquiciamiento inicial no pudo ser corregido del todo. La inestabilidad gubernamental también contribuyó lo suyo al manejo deficiente de la economía: sólo Vicente Uribe se mantuvo en el Ministerio de Agricultura durante casi toda la contienda, mientras que en el resto de los departamentos el baile de nombres fue continuo. Bien al contrario, en el bando nacional, no faltó la disciplina, se militarizaron los recursos y la dirección de los mismos se puso en manos de generales y oficiales, o de gente experta, como Andrés Amado y José Larraz y en esa misma tarea colaboraron funcionarios de los cuerpos del Estado.

Un trabajo sobre la economía de la guerra civil presenta dificultades que no cabe ignorar. Aunque existen algunos buenos estudios de carácter regional o sectorial no se dispone de investigaciones de conjunto. Lo más aproximado son las síntesis valiosas que han realizado recientemente Malefakis (1987), Velarde (1989), Jordi Palafox (1996) y José Angel Sánchez Asiaín (1999) y; también sigue siendo fundamental la aportación pionera de Josep Maria Bricall (1985). Por otra parte, la información cuantitativa es escasa y dispersa y queda mucho por hacer en los archivos nacionales y extranjeros donde existe documentación todavía sin explotar. Sí sabemos que la evolución de la economía fue muy distinta en una y otra zona, más ordenada y mejor administrada en el territorio controlado por los nacionales que en las provincias de la España republicana. Sobre el comportamiento de la producción, asignación y distribución de los recursos incidieron numerosos factores. Tres fueron sin duda los más significativos: el distinto cariz de la política económica, centralizada y disciplinada en el bando nacional y dispersa y desorganizada en el bando republicano; la política de No Intervención, más perjudicial para el Gobierno de Madrid-Valencia que para las autoridades de Burgos; y la propia marcha de la contienda, que fue traspasando territorios y recursos de la zona republicana a la zona nacional.

Como han puesto de relieve los cinco autores citados, nada más estallar el conflicto aparecieron sobre el territorio peninsular dos economías de desigual importancia que respondían a dos modelos muy distintos. Como el clima económico se enrareció más en la zona republicana que en la nacional, la consecuencia fue que la producción agraria e industrial descendió más en aquélla que en ésta y los servicios sufrieron un mayor deterioro en las capitales republicanas que en las ubicadas en el territorio controlado por el Ejército de Franco.

⁵ Este texto, pensado como introducción general al conjunto de trabajos que se presentan a la sesión del Congreso sobre la economía de la guerra civil, ha sido redactado antes de disponer de las aportaciones que van a ser presentadas en el citado Congreso. Su redacción final variará e incorporará las investigaciones sectoriales efectuadas a tal efecto.

⁶ Citado en Juan Velarde (1989), p. 452.

Tras el alzamiento militar, la zona bajo control de la República contaba con una población superior. De los 24 millones de habitantes del país, catorce millones (el 60 por ciento) quedaron en territorio republicano, frente a diez (el 40 por ciento) en zona nacional. A mediados de septiembre esta cifra había bajado, pero todavía conservaba una mayoría del 52 por ciento y no perdió esta superioridad demográfica hasta después de la caída de Málaga, en febrero de 1937, que la hizo descender hasta el 49 por ciento. La primera vez que los nacionales obtuvieron una ventaja poblacional grande fue después de la caída del Norte, al año de comenzar la guerra.

De igual modo, la República disponía de la mayor parte de la capacidad industrial del país, incluidas las tres zonas fabriles y mineras más importantes, Cataluña, el País Vasco y Asturias, así como una parte nada desdeñable de la agricultura, entre un tercio y la mitad, incluyendo los cultivos más rentables y competitivos del Mediterráneo. El 90 por ciento de la producción de agrios-cítricos, el 50 por ciento de la producción de aceite, el 80 por ciento de la producción de arroz y la mayor parte de la producción hortofrutícola. Además, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia se encontraban las sedes de las principales empresas, de las cámaras de comercio y de las entidades financieras. De las seis Cámaras de Compensación del país, sólo las de Sevilla y Zaragoza estaban en zona nacional. Las Bolsas de Valores quedaron en zona republicana, así como los dos tercios de las oficinas bancarias y de las cajas de ahorro, donde se generaban las tres cuartas partes de los recursos captados por el sistema financiero. Disponía también del Banco de España y sus inmensas reservas de oro, unas 700 toneladas de oro, valoradas 2.500 millones de pesetas. El peso financiero de la zona republicana era, pues, abrumador. En cuanto a las comunicaciones, los principales puertos y la mayor parte de la flota mercante permanecieron en manos republicanas.

A diferencia de la zona republicana, la zona nacional estaba integrada fundamentalmente por las áreas rurales del país. Contaba con las dos terceras partes de las reservas y la capacidad de la producción de trigo, con la mitad de la producción de maíz, con el 60 por ciento de leguminosas y con más de dos tercios de la producción de patatas; en la misma zona se hallaba la mayor parte del ganado de leche y de tiro, el 75 por ciento del vacuno, el 70 por ciento del ovino y una buena parte de la producción lanera. La producción pesquera también era superior en la zona nacional. Por el contrario, en 1936 no tenía prácticamente industria, ni yacimientos mineros, con la excepción del cobre y de las industrias conserveras gallega y navarro-riojana.

Puede estimarse, en resumen, que al iniciarse la contienda un 30 por ciento del producto agrario correspondía a la zona republicana y un 70 por ciento a la zona nacional. Inversamente, alrededor del 80 por ciento del valor bruto del producto industrial correspondía a la zona republicana y el 20 por ciento a la zona nacional. El territorio republicano representaba el 70 por ciento del presupuesto estatal. El punto débil inicial de la República fueron sus carencias de productos básicos de subsistencia, con problemas de abastecimiento de las ciudades. Del lado nacional su falta de base industrial, que sólo pudo superar merced a la ayuda militar prestada por italianos y alemanes.

Con la evolución de las operaciones militares, avance territorial del Ejército nacional y las derrotas sucesivas del Ejército y de las milicias republicanas, este balance de partida fue modificándose. El territorio republicano pronto quedó escindido en dos partes, una discontinuidad que dificultó las comunicaciones y el empleo eficiente de los recursos. Más trascendental fue que la debilidad industrial de la zona nacional dio un giro radical en el verano de 1937, con la conquista del País Vasco y la posterior incorporación de Asturias. Con ello los nacionales dispusieron de la totalidad de la estructura fabril vasca (astilleros, empresas siderometalúrgicas, sociedades químicas, empresas de transformados metálicos) y de los principales yacimientos de mineral de hierro y carbón. Más grave para la República fue, si

cabe, la sangría que sufrió de capital humano a consecuencia de la revolución social que alcanzó a la totalidad de los sectores económicos. Empresarios, técnicos, directivos de sociedades mercantiles y entidades financieras acosados, atemorizados y desposeídos de sus cargos y responsabilidades, se inhibieron o se pasaron, cuando pudieron, al bando nacional al que aportaron su influencia y sus conocimientos.

Los dos bandos en conflicto no se diferenciaron únicamente en los recursos materiales a su disposición, sino más todavía en la forma de organización y dirección de sus respectivas economías, como bien han descrito Bricall y Sánchez Asiaín. Frente a una organización centralizada, militarizada y férreamente disciplinada de los nacionalistas, el modelo republicano osciló entre el caos revolucionario y anticapitalista del primer año y los intentos, no siempre bien encaminados ni exitosos, de centralización y reestructuración acometidos por Negrín desde su llegada al Gobierno.

El alzamiento militar del 18 de julio supuso para grandes sectores de la clase obrera, en particular para los trabajadores industriales y para los jornaleros anarcosindicalistas (CNT) y socialistas (UGT) el catalizador y el elemento desencadenante de la revolución social. Una revolución social dirigida contra los fundamentos del existente orden capitalista, la gran propiedad agraria y la propiedad privada de los medios de producción. En el verano de 1936, la industria, el comercio y los servicios fueron ampliamente colectivizados en Cataluña y también, aunque en menor medida, en Levante y en Madrid. Los obreros se incautaron de las grandes fábricas, de los almacenes, de los hoteles y de los servicios de transporte urbano. Sólo el País Vasco, en manos de los nacionalistas, escapó al movimiento socializador, quedando las fábricas y establecimientos bajo control de sus propietarios. El proceso discurrió de manera autónoma y en la mayor parte de los casos los trabajadores no encontraron resistencia de propietarios o gestores, huidos unos y pasivos otros ante los acontecimientos. En el movimiento fueron protagonistas los trabajadores afiliados a la CNT, los anarquistas de la FAI, los miembros del antiestalinista POUM y, en menor medida los afiliados a la UGT.

A la quiebra del aparato del Estado y al colapso de la producción contribuyó el desmembramiento de la autoridad central, que impidió durante meses la formulación de una política económica unificada tendente a reasignar recursos hacia fines bélicos. Como sostiene Sánchez Asiaín, la complejidad de la conducción de la economía republicana aparece todavía más patente si se considera que desde los primeros momentos de la guerra se introdujeron diversos modelos de descentralización regional. Junto al Gobierno central, actuaron las instituciones autónomas legales de Cataluña y el País Vasco, los consejos regionales revolucionarios de Aragón, de Asturias y León y el Consejo Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia; todos ellos se convirtieron en verdaderos enclaves de poder, asumiendo facultades legislativas y ejecutivas independientes y desarrollando una estrategia propia derivada de su particular concepción ideológica.

Aunque durante el corto tiempo del Gobierno de Giral, éste fue perdiendo espacios de soberanía política y económica a favor de las organizaciones obreras y de los gobiernos autónomos, llevó a cabo algunos intentos de controlar la situación. Como reacción y en un intento de encauzar el proceso de incautaciones, el Gobierno decretó la intervención de los servicios públicos y de las empresas abandonadas por sus propietarios, desgranando un rosario de normas que confluyeron en el decreto de 30 de agosto de 1936 por el que el Estado intervino “todas las sociedades que tengan por objeto realizar operaciones de crédito, producción o consumo”, empresas que en adelante serían controladas por el Ministerio de Hacienda a través de la Intervención General de la Administración del Estado. El Gobierno creó para ello un Comité de Intervención de Industrias. Esta medida hay que entenderla como un primer intento para recuperar las directrices de las requisas y colectivizaciones llevadas a cabo sin control en los sectores productivos. En el decreto se señalaba que para “llegar a la

normalización de todas las actividades industriales se estima absolutamente indispensable la intervención del Estado en todas las industrias y muy especialmente en las que afectan a servicios públicos” y asimismo se indicaba que el Comité de Intervención de Industrias “ejercerá el control y asumirá la dirección inmediata de las que considere necesario”.

Hubo que esperar, sin embargo, a la formación del Gobierno de Largo Caballero en el mes de septiembre para que el Estado recuperase parte de las competencias perdidas. En la esfera de la economía de ello se encargó Juan Negrín, que asumió la cartera de Hacienda, desde la cual inició una política de centralización y de coordinación, a la par que trataba de poner orden en las incautaciones e intervenciones espontáneas. Creó dos nuevos organismos como palancas para recuperar los resortes de la economía: la Dirección General de Economía y la Comisaría General de Economía. A la primera se le encomendó “coordinar y unificar los distintos factores económicos del país” y la segunda recibió el encargo de pilotar la “perfecta coordinación entre las funciones que correspondían a los Ministerios de Hacienda, de Agricultura y de Industria y Comercio...en cuanto a la regulación y financiación de la producción y el comercio exterior”. En el aspecto exterior ese control se reforzó con la reorganización del Cuerpo de Carabineros, que se situó bajo la dependencia directa del Ministerio de Hacienda y con la reclamación urgente para el Gobierno central de las fronteras y organismos relacionados con el comercio internacional, lo cual no resultó nada sencillo, pues hubo de desmontarse entidades creadas por las organizaciones sindicales y enfrentarse a la Generalidad catalana por el control de los pasos aduaneros de Francia. Después del traslado del Gobierno a Valencia, Negrín completó el cuadro de organismos coordinadores de la actividad económica con la creación de las Direcciones Generales de Comercio Interior y de Comercio Exterior. Luego, con el decreto de 21 de noviembre de 1936 nació el Ministerio de Comercio, fruto de la incorporación al Gobierno de ministros anarquistas y por desdoblamiento del antiguo Ministerio de Industria y Comercio. El nuevo departamento se organizó en una Subsecretaría y dos Direcciones Generales: de Comercio Interior se le atribuyó la tarea de unificar la actuación de todos los organismos de carácter no oficial que habían tomado a su cargo el abastecimiento de capitales, pueblos y hasta de los frentes de batalla, y de Comercio Exterior. Con la crisis y el cambio de Gobierno en mayo de 1937, la dirección económica de la guerra pareció mejorar. El programa económico de Negrín recuperó para el Estado áreas de poder perdidas en los primeros meses de la guerra; intentó reorganizar la industria bélica, asegurar el abastecimiento de los ejércitos y normalizar el suministro de la retaguardia. Pero este golpe de timón, nunca profundo, llegó tarde porque ya estaba próxima la caída de todo el frente Norte.

En la zona nacional las cosas fueron bien distintas. Su aparente fragilidad económica, con nula implantación en zonas industriales o de producción de materias primas, así como su carencia de recursos financieros, se vio sobradamente compensada por el auxilio exterior. Se trató del incondicional apoyo económico y militar de la Italia fascista y de la Alemania nazi y de la cobertura territorial prestada por el Portugal de Salazar, de gran importancia estratégica. A ello se unió la política de “no intervención” de las potencias occidentales, las preferencias de las grandes empresas americanas por el bando franquista y el activo soporte de la Iglesia a la sublevación. Sin la colaboración económica y militar exterior resulta difícil imaginar cómo, faltos de recursos financieros, de armamento moderno y de base industrial, los rebeldes hubieran podido defender el amplio territorio conquistado en los primeros meses

Además, la zona nacional no sufrió los problemas de disgregación interna de la República. Aunque en las filas de los sublevados se alineaban fuerzas políticas heterogéneas – falangistas, tradicionalistas, monárquicos, conservadores- lo cierto es que todas tenían un interés común que les cohesionaba: el rechazo a la República y la vuelta al antiguo estado de cosas. Al contrario que en lado republicano, en el nacional no hubo desorganización

institucional. La preponderancia de lo militar sobre lo civil fue evidente desde el principio, con una pronta dirección militar unificada que determinó una supeditación absoluta de las actividades económicas a los objetivos bélicos. Frente a la indisciplina provocada por la revolución, en la zona nacional reinó la más férrea disciplina productiva. El 1 de octubre de 1936, Franco alcanzó un liderazgo militar indiscutible y después, al ser proclamado jefe del Estado, concentró en sus manos la totalidad de los poderes ejecutivos. El objetivo de la victoria militar, por encima de cualquier otra consideración, se convirtió en el elemento de cohesión de las fuerzas integradas en el Movimiento.

Para los sublevados el 18 de julio, los problemas económicos tuvieron un origen distinto al de los republicanos, siendo el más esencial la ausencia de una base industrial que no lograron hasta mediados de 1937 con la toma de Bilbao. Deben distinguirse, por tanto, dos etapas. Hasta esa fecha, la insignificancia manufacturera del territorio se refleja en la escasa atención que los gestores nacionalistas prestan a la industria. Se constituyó una denominada Comisión de Industria y Comercio, para evaluar la cuantía de los suministros bélicos más imprescindibles, así como diversas Comisiones Provinciales de Clasificación, encargadas de establecer un censo de empresas y de evaluar los problemas de los establecimientos fabriles existentes. A partir del otoño de 1937, con la incorporación de toda la provincia de Vizcaya y la ocupación de Asturias, la situación cambió de forma radical. El dominio de ambas zonas permitiría a los rebeldes contar con materias primas y productos vinculados a la fabricación de armamentos. Sólo Vizcaya producía la mitad del total de los explosivos de la economía española y sus empresas metalúrgicas eran las más importantes del país. De inmediato se formó una Comisión Militar de Incorporación y Movilización Industrial, la cual diseñó un plan para asegurar la recuperación de la producción en todas las empresas mediante su militarización y la movilización de la mano de obra. La recuperación de las cifras de fabricación fue espectacular y de forma general en todo el norte de la península se inició una fase de reactivación económica en la que participaron todos los sectores, desde la minería y la metalurgia básica hasta el conjunto de las industrias mecánicas y de transformados metálicos.

3. La evolución de las macromagnitudes: la década de los treinta

Para España la década de 1930 fue un desastre. En el ámbito de la economía, el proceso de convergencia iniciado desde principios de siglo se frenó de manera brusca. Desde los decenios inaugurales de la centuria, una tasa de crecimiento por encima de la media europea había aproximado los índices de renta y de vida españoles a los registrados en los países más avanzados del Continente. A ello habían contribuido en distinta forma varios factores: un avance tecnológico indudable, tanto en la agricultura como en la industria, una lenta pero continua apertura hacia el exterior, tasas de inversión privada y pública elevadas en términos históricos, la modernización del sector financiero, de los medios de transporte y del sistema de infraestructuras, así como sucesivas reformas del modelo fiscal y del aparato administrativo del Estado. España había progresado de forma notable durante la segunda etapa de la Restauración (1900-1923) y durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1929).

Al cambiar el decenio la situación comenzó a empeorar y según fueron avanzando los años el deterioro se hizo cada vez más patente. La economía española sufrió los embates sucesivos de la Gran Depresión, del cambio de régimen político (la sustitución de la Monarquía borbónica por una Segunda República) y sobre todo el golpe durísimo de la guerra civil, que desorganizó el sistema productivo, trastocó los mecanismos de asignación de los recursos y supuso un retroceso general de los niveles de vida y bienestar. Puede afirmarse, sin

temor a equivocarse, que los ganados durante el primer tercio de siglo se perdió en los diez años siguientes ⁽⁷⁾.

Gracias al titánico esfuerzo realizado en los últimos años por Prados de la Escosura (2003), disponemos hoy de cifras agregadas para conocer cual fue el comportamiento de la economía española en el conjunto de la década. El autor ha llevado a cabo la reconstrucción estadística del período empleando la práctica totalidad de la información publicada hasta la fecha, por lo que, aun admitiendo los posibles defectos que todo cálculo histórico comporta, no hacer uso de sus datos sería un desperdicio injustificable.

El cuadro 1 ofrece una perspectiva global de la evolución de la economía española desde 1929, final de un ciclo secular de crecimiento que se remonta al comienzo del siglo, hasta 1939, un año que comparte tres meses de guerra y nueve de paz. La paralización productiva durante el primer sexenio, coincidiendo mayormente con la Segunda República, resulta innegable. El PIB de 1929 es idéntico al registrado en 1935. Entremedias se observa una caída, moderada si se compara con la de otros países, con dos cifras mínimas en 1931 y 1933. Podría decirse que el impacto conjunto de la crisis mundial y del cambio de régimen político provocó un descenso de la renta cercano al 10 por ciento ⁽⁸⁾.

Con la guerra civil, el estancamiento del quinquenio republicano se transformó en un descenso imparable de las macromagnitudes económicas. El retroceso es bien visible en los datos del PIB, en particular durante los ejercicios de 1936 y 1937. A esta evolución tan negativa contribuyeron todas las variables que aparecen en el cuadro citado: el consumo, la inversión y el comercio exterior sufrieron caídas del 30 y hasta del 40 por ciento con respecto al nivel de 1935 y de mayor consideración si como fecha de cálculo se toma 1929. Sólo los gastos del sector público tuvieron un comportamiento expansivo, evitando un derrumbamiento del PIB de mayores proporciones. Con todo, hacia 1939 la renta media española apenas llegaba al 75 por ciento de la alcanzada en 1929, sugiriendo que en esos diez años la economía nacional retrocedió a una tasa anual del (-) 2,5 por ciento. Puesto que la población al final de la guerra era superior a la existente diez años antes, en términos per capita, ese retroceso fue aún más dramático.

El cuadro 2 sugiere que al descenso del consumo privado, el componente de mayor peso en el PIB, contribuyó sobre todo la caída registrada en la compra de bienes duraderos, que nada más estallar el conflicto se desplomó sin lograr recuperarse de forma significativa en los años siguientes, lo que da idea del deterioro sufrido en el nivel de vida medio de las familias. El consumo de no duraderos (en esencia, productos alimenticios) también cayó, aunque menos, en particular en la zona nacional. La trayectoria seguida por la FBCF fue, si cabe, aun más negativa; todos sus componentes retrocedieron a niveles muy inferiores a los ya de por sí reducidos de la primera parte del decenio; la contracción de la inversión fue notable

⁷ Para la economía de los primeros treinta años del siglo XX puede consultarse las síntesis de José Luis García Delgado y J.C. Jiménez (1999) y Comín (2002)

⁸ La evolución agregada no debe ocultar, sin embargo, que los distintos componentes del PIB tuvieron una trayectoria muy variada. Mientras el consumo privado y el consumo público mantuvieron los niveles previos a la crisis, o incluso subieron ligeramente, la inversión se desplomó entre un 30 y un 35 por ciento, unas proporciones nada desdeñables. El sector exterior también registra un notable retroceso, del 25 por ciento las exportaciones y del 40 por ciento las importaciones. El mal comportamiento de la inversión productiva cabe achacarlo al clima de incertidumbre creado por los trastornos políticos internos y por las malas noticias económicas llegadas del exterior. En cuanto al derrumbe del comercio exterior, éste refleja sin más la vía a través de la cual se coló la depresión internacional en la economía española. Si el PIB logró sostenerse fue gracias a la conducta del consumo privado, empujado por las subidas salariales aprobadas en el primer bienio republicano y a las magníficas campañas agrarias de aquellos años, apenas afectadas por el proceso de reforma de la propiedad de la tierra. El consumo público también ayudó, merced a las obras de infraestructura emprendidas desde 1932 y a los recursos destinados a construcciones escolares.

en la construcción, residencial y no residencial, catastrófica en el sector de material de transporte y de menor intensidad en maquinaria y bienes de equipo, que se sostuvo algo mejor por la demanda de fabricación de armamento, pesado y ligero, y municiones de toda clase. También las importaciones se contrajeron más que las exportaciones, en lógica paralela con lo ocurrido a la producción agregada y con lo sabido acerca de la escasez de materias primas e inputs intermedios característica de toda la etapa bélica.

Las estadísticas elaboradas por Prados nos permiten asimismo efectuar un examen de carácter sectorial. La información pertinente se incluye en los cuadros 3, 4 y 5. En efecto, todos los sectores productivos sin excepción retrocedieron, si bien los descensos fueron menores en la agricultura y en los servicios que en la industria y la construcción, donde el descalabro adquirió notables dimensiones⁹). La producción agraria en la zona republicana se vio plagada de todo tipo de dificultades, por los acontecimientos políticos, por el abandono de los campos, por la pérdida de ganado de labor, por la falta de brazos para las faenas de siembra y recolección, por la errónea política de intervención de precios, por causa de las confiscaciones y ocupaciones de tierras y también por el descenso de los rendimientos en las tierras colectivizadas. En 1936 se registró un volumen de cosecha muy inferior a la del año anterior; después el descenso se frenó porque la producción en la zona nacional logró recuperarse, si bien en 1939 el índice de la producción agraria estaba todavía lejos, un 20 por ciento por debajo, del estimado para los primeros años de la década. En la industria la evolución siguió una línea descendente hasta los meses finales de 1937, momento a partir del cual se inicia una ligera recuperación, reflejando la toma por parte de las tropas nacionales de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. La trayectoria más negativa la encontramos en las manufacturas textiles, madera y corcho y en la química. Los índices muestran asimismo descensos pronunciados en la metalurgia, en el sector de la transformación y en material de transporte, pero al mismo tiempo revelan la sostenida recuperación en 1938 y 1939. Con todo, ninguno de los siete indicadores expuestos en el cuadro 4 supera los niveles anteriores a la guerra. Y en cuanto a los servicios, cuyo descenso es evidente, sabemos que los más afectados fueron el transporte, ferroviario y por carretera, las comunicaciones y el sector financiero; el que mejor logró sostenerse, no sin pérdidas considerables fue el grupo de actividades diversas englobadas bajo el epígrafe genérico de comercio.

La producción descendió y los precios subieron (ver cuadro 6). Puesto que la guerra se financió por vías nada ortodoxas, la consecuencia fue la inflación. Ambos contendientes emplearon un volumen similar de recursos, aunque cubrieron sus gastos de manera distinta. En términos generales, los nacionales gestionaron mejor sus recursos fiscales y tomaron una cantidad menor en anticipos del Banco de España que los republicanos: mientras aquéllos incurrieron en un déficit de 8.415 millones de pesetas, éstos necesitaron dinero de nueva creación por 23.597 millones de pesetas. Por eso, como puede comprenderse, la inflación varió mucho de una zona a otra. Aunque los datos oficiales no reflejan la verdadera realidad, debido a los controles e intervenciones de todo tipo sufridos por los mercados, el deflactor del PIB, referido a ambas zonas, muestra una alza entre 1936 y 1939 cercana al 65 por ciento. Las tensiones inflacionistas fueron muy superiores en el territorio republicano. Así, la mayor creación de dinero, unido a unos controles menos rígidos o incluso ineficaces, se reflejó en una tasa de inflación muchísimo más elevada que en la zona nacional, donde una regulación más disciplinada y un menor recurso directo al banco emisor permitió contener las alzas de precios dentro de límites menos extremos.

⁹ En todo caso no olvidemos que estas cifras agregadas se refieren a ambas zonas en conflicto, republicana y nacional, ocultando las conocidas disparidades entre la evolución de la economía en una y en otra. Como es sabido, el comportamiento productivo en el territorio controlado por la República fue mucho peor que en las provincias bajo mando nacional.

Y de la mano de la inflación llegó la desvalorización del dinero y la depreciación del tipo de cambio, de nuevo mayor para la moneda republicana que para la valuta nacional. Según los cálculos efectuados por el Servicio de Estudios del Banco de España, hacia finales de 1936 la depreciación de la divisa republicana alcanzaba el 19 por ciento, frente a un 7 por ciento de la nacional; al terminar 1937 la diferencia se había ampliado: del 75 por ciento para la peseta de la República y del 17 por ciento para la emitida desde Burgos; y en 1978 la depreciación llegaba al 98 por ciento para la primera y tan sólo al 27 por ciento para la segunda. En marzo de 1939, la final de la guerra, la moneda republicana había perdido el 99 por ciento de su valor inicial y la nacional en torno a un 30 por ciento. De nuevo en este caso debe añadirse que esta diferencias entre una y otra divisa deben achacarse no sólo al diferencia de inflación entre ambas zonas, sino también al riguroso y efectivo control de cambios impuesto por las autoridades de Burgos.

4. Guerras civiles: Estados Unidos, México y Rusia

En esta sección describimos el comportamiento de tres economías que, en distintos tiempos y lugares, sufrieron los avatares de sendos conflictos internos. Nuestro objetivo aquí es llevar a cabo un ejercicio comparativo confrontando las consecuencias económicas de las guerras civiles en Estados Unidos, México y Rusia. Aunque comparar acontecimientos que se sucedieron en tiempos y lugares geográficos distintos y cuyos orígenes y motivaciones obedecieron a causas internas propias pueda parecer, a primera vista, poco justificado, lo cierto es que las cuatro contiendas bélicas, la guerra de secesión americana y las guerras civiles revolucionarias mexicana, rusa y española, comparten elementos comunes: en todas ellas se registró un claro retroceso económico, con descensos de la capacidad productiva y de los niveles de output agrario e industrial, así como desviaciones notables de recursos humanos y financieros del sector de bienes civiles hacia el sector de bienes militares. En todas, además, la inflación y la depreciación monetaria estuvo a la orden del día. Por decirlo de forma gráfica: las consecuencias económicas de las cuatro guerras civiles fueron negativas.

Por supuesto, contestar a la pregunta de cuál de los cuatro conflictos infligió mayores daños a sus correspondientes economías no resulta nada fácil. Desde el punto de vista institucional las transformaciones provocadas por la revolución rusa no tuvieron parangón con las acaecidas en los otros tres casos. Allí, el marco jurídico-legal y las reglas de juego se vieron radicalmente alteradas: el mercado suprimido por la intervención del Estado y el orden liberal decimonónico y el mismísimo sistema capitalista desaparecieron. Nada de esto se derivó de la guerra de secesión americana o de las revoluciones mexicana o española, no obstante la existencia de programas sociales de reforma radical (Zapata) o de los intentos colectivizadores del Frente Popular llevados contra o a pesar del Gobierno de la República.

¿Cuál de las cuatro guerras fue más costosa, en vidas humanas y en destrucción de capital? ¿Cuál de ellas provocó una mayor caída de los niveles de renta y consumo per cápita? ¿En qué medida y con qué intensidad retrasaron la industrialización en marcha en los cuatro países? ¿Cuál generó efectos más duraderos retardando la recuperación de las respectivas economías? Estos son algunos de los interrogantes que deseamos responder en esta sección, describiendo la evolución y los rasgos de las economías en guerra de los Estados Unidos, México y Rusia.

Las consecuencias económicas de la guerra civil americana, 1861-1865

Hasta la revolución cliométrica se consideraba que la guerra civil había tenido consecuencias favorables para el conjunto de la economía americana, acelerando el proceso de industrialización, al tiempo que había transferido el poder político a manos de los magnates de

la industria y de las finanzas en el Norte, en detrimento de los propietarios agrarios del Sur. De acuerdo con esta tesis, cuyos defensores más sobresalientes eran Charles A. Beard y Louis M. Hacker, la victoria del ejército de la Unión sobre las tropas confederadas había favorecido el progreso económico posterior de los Estados Unidos. La derrota del Sur y la abolición de la esclavitud apuntaló la economía de mercado y el capitalismo, merced a una serie de cambios legislativos que favorecieron el desarrollo de las fuerzas productivas. La guerra representó, además, una línea divisoria en la historia americana por su elevado coste financiero y en vidas humanas (625.000 muertos), por la desaparición de un sistema social basado en la esclavitud y porque de hecho evitó la secesión y la ruptura de la unidad del país ⁽¹⁰⁾

Este punto de vista comenzó a cambiar a raíz de un trabajo publicado en 1961 por Thomas C. Cochran, quien llamó la atención de la débil base cuantitativa sobre la que se asentaba la interpretación tradicional. Bien al contrario, la información estadística recopilada por Robert Gallman mostraba que las tasas de crecimiento de las décadas de 1840 y de 1880, separadas por un período de treinta años, habían sido notablemente superiores a la registrada en el decenio correspondiente a la guerra de secesión. Su detallado repaso sectorial tampoco confirmaba que la guerra hubiese estimulado la producción o el empleo, concluyendo que los datos disponibles permitían sostener que la guerra civil más que estimular el crecimiento había retardado la industrialización americana. ⁽¹¹⁾. Pocos años después, Stanley Engerman abundó en lo dicho por Cochran ⁽¹²⁾. Negó que los cambios políticos y legislativos hubiesen sido instrumentales impulsando el crecimiento americano o el proceso de industrialización, ya bien consolidado antes de 1860, o que la guerra hubiese implicado un cambio radical de tendencia o de estructura en la economía. Los datos recogidos en el cuadro 7 atestiguan la diferencia entre el impacto de la guerra en el Sur y en el resto del territorio de la naciente federación. En el Sur los efectos del conflicto fueron devastadores, con la abolición de la esclavitud y las destrucciones materiales, el output per capita descendió en un 39 por ciento en la década de la guerra civil y todavía en 1880 su nivel se encontraba un 21 por ciento por debajo del existente en 1860. En el Norte, por el contrario, la recuperación fue más temprana, aunque en ningún caso puede afirmarse que la economía creciese de forma especialmente rápida. Engerman también sostuvo que como consecuencia de la guerra los salarios reales descendieron (cuadro 8), a pesar de que la información disponible el mercado laboral detectó una continua escasez de mano de obra, que llevó a los empresarios a intensificar la mecanización de labores. Esta caída de las rentas del trabajo no condujo a un incremento de los beneficios empresariales, ni alteró la distribución en la remuneración de factores ⁽¹³⁾. Tampoco la inflación parece que trajera un aumento de la demanda de inversión derivada de tipos de interés reales por debajo de los nominales ⁽¹⁴⁾.

¹⁰ Una visión de conjunto de las consecuencias de la guerra civil americana en O'Brien (1988). La tesis tradicional Beard-Hacker resumida en el clásico artículo de Engerman (1966); y en el reciente de Ransom (2001). Por lo demás, para una visión de conjunto y por sectores se encuentra en la recopilación realizada por Andreano (1967)

¹¹ Cochran (1961), pp. 197-210.

¹² Engerman (1966), pp. 176-199

¹³ Engerman sugiere que el descenso de los salarios pudo obedecer a un deterioro en la calidad del trabajo -caída de la productividad- o, como sostienen Kessel y Alchian, a la depreciación del tipo de cambio y a cambios en la estructura impositiva durante la guerra que redujeron la producción disponible. Estos autores atribuyen al menos la mitad de la caída de los salarios reales al deterioro en la relación real de intercambio y otra parte significativa al uso excesivo de impuestos indirectos para financiar la guerra, al incrementar los precios y ampliar la brecha entre la producción y la cantidad de bienes de consumo civiles.

¹⁴ Según han explicado Friedman y Schwartz, entre otros, los empresarios esperaban que los precios cayeran tras la guerra, lo que explicaría la falta de demanda de crédito para nuevas inversiones a pesar del bajo nivel de los tipos de interés durante el conflicto.

Por lo que se refiere a la financiación de la guerra ambos gobiernos recurrieron a la emisión de billetes y al endeudamiento. La Unión, con mercados financieros más desarrollados y una base industrial más amplia, efectuó una financiación más equilibrada, lo que redundó en una menor inflación. Hasta 1863, el 15 por ciento de los gastos los cubrió con impuestos y luego una reforma tributaria incrementó ese porcentaje hasta el 25 por ciento. El crédito, mediante la emisión de obligaciones y bonos, representó cerca del 55 por ciento, mientras que el resto de la financiación, un 20 por ciento, corrió a cargo de los renombrados “greenbacks”, una serie de emisiones de billetes del Tesoro sin cobertura metálica que alcanzaron elevadas sumas. La Confederación, con una organización fiscal menos ordenada, empleó medios más heterodoxos para financiar la guerra. Los impuestos tan sólo lograron cubrir una décima parte de todos sus gastos y para la parte restante el Gobierno hubo de acudir a la emisión monetaria, un tercio, y a créditos exteriores, con colocación de bonos y obligaciones en los mercados de Londres y Amsterdam. A consecuencia de ello, la inestabilidad, atizada por la desconfianza desde las primeras derrotas importantes, elevaron los precios rápidamente: en 1862 se doblaron y en 1863 se multiplicaron por trece; en 1864 con la perspectiva de una derrota militar segura la inflación se desbocó, como puede comprobarse en el mismo cuadro 8, hasta el punto de que para el mes de septiembre los billetes confederados no valían prácticamente nada, llegándose en algunas ciudades al trueque de mercancías o al empleo del dinero de la Unión.

Queda referirnos para terminar, a los costes de la guerra, un asunto abordado de forma rigurosa en un pionero y afamado trabajo de Claudia Goldin y Frank Lewis, cuyos frutos se resumen en el cuadro 9 ⁽¹⁵⁾. Estos autores separan los costes en dos grandes categorías: directos e indirectos. Los primeros incluyen partidas tan obvias como el total de los gastos públicos (estatales y locales) empleados por ambos bancos, más las destrucciones de capital físico y las pérdidas de capital humano (muertos y heridos derivados del conflicto bélico); la cifra total se eleva a 6.652 millones de dólares a precios de 1860, repartidos a mitad entre el Norte y el Sur; esta cantidad, nada desdeñable, representa 1,5 veces el PIB de los Estados Unidos pre-bélicos en 1860; o dicho de otra forma, el conjunto de gastos y pérdidas del período 1861-65 supuso entre el 20 y el 25 por ciento de la renta nacional americana de ese año. En términos “per capita” sin embargo la diferencia entre una y otra zona es bastante más pronunciada: 148 dólares en el Norte (el ingreso medio de un año) frente a 376 dólares en el Sur (el ingreso medio equivalente a dos años y medio). Por su lado, los costes indirectos recogen los efectos a medio y largo plazo de la guerra: esto es, la diferencia entre el flujo de consumo hipotético de la economía americana en ausencia de guerra y el flujo de consumo real. Con arreglo a las estimaciones de Goldin y Lewis, el descenso en el Sur sumó 2.560 millones de dólares (293 en términos per capita), mientras que en el Norte la disminución fue menor, 1.149 millones de dólares (51 en términos per capita). En conjunto, los costes directos e indirectos se elevaron a 10.361 millones de dólares, repartidos entre el Sur y el Norte tal como figura en el cuadro 9: una carga elevadísima para los perdedores (670 dólares per capita) y más llevadera para los vencedores (199 dólares per capita). Esta desproporción se notó de forma más patente después. Así, la economía sureña no alcanzó el nivel de consumo de preguerra hasta 1874-75 y su nivel de consumo real no se puso a la altura del hipotético hasta principios del siglo XX, en tanto que los estados del Norte ya habían alcanzado el nivel de preguerra hacia 1869 y su nivel de consumo real igualaba al hipotético a mediados de la siguiente década ⁽¹⁶⁾. En resumen, cabe afirmar que la guerra civil americana fue muy costosa

¹⁵ Goldin and Lewis (1975), pp. 299-326

¹⁶ Estas conclusiones son compatibles con las estimaciones de producción y de renta nacional efectuadas por Robert Gallman, quien sugería que los niveles registrados en 1870 estaban por debajo de los que se hubiesen

en término de pérdidas humanas (625.000 muertos) y materiales; se llevó por delante el equivalente a un cuarto de la renta nacional de un año pre-bélico y el conjunto de la economía acumuló un retraso de varios años.

Las repercusiones económicas de la revolución mexicana

En cuanto a sus orígenes y causas, la revolución mexicana comparte con el conflicto civil español su complejidad política y social; también por sus consecuencias, pues aquella conformó el Estado mexicano del siglo XX y condicionó buena parte de la vida política del país durante décadas, al igual que lo hizo la victoria de Franco en el caso de España.

Todo comenzó en Ciudad Juárez cuando el Ejército federal sucumbió ante las fuerzas sublevadas de Orozco y Villa en cuestión de meses, provocando la renuncia de Porfirio Díaz el 25 de mayo de 1911 y su exilio seis días después. Estos acontecimientos dieron origen a un largo ciclo revolucionario de diez años durante los cuales el país estuvo enfrascado en una sangrienta lucha civil cuyos resultados provocaron un cambio de reglas institucionales que, respetando las bases esenciales de la economía de mercado (la propiedad privada), condujeron a una fuerte intervención del Estado en el funcionamiento del sistema productivo.

El período revolucionario registró una cierta estabilidad hasta 1913. El golpe de Estado del general Victoriano Huerta y el posterior asesinato del presidente Francisco Madero el 22 de febrero reavivó la lucha armada, ahora encaminada a destituir a Huerta. La sublevación tuvo lugar principalmente en el norte del país a lo largo de los estados fronterizos y en el distrito de Morelos arreciaron los combates en marcha. Inmediatamente se organizó un Ejército estatal liderado por Alvaro Obregón; en Chihuahua la iniciativa correspondió a Francisco Villa, quien además estimuló levantamientos en Zacatecas y Durango. En Coahuila el gobernador Venustiano Carranza condujo la revuelta e intentó persuadir a otros gobernadores que también se rebelaran, pero sin éxito. Carranza proclamó el Plan de Guadalupe el 26 de marzo denunciando la traición de Huerta, del Congreso y de la Suprema Corte, pero sin mencionar ninguna reforma social o económica. En Morelos, Emiliano Zapata con las promesas del Plan Ayala para recuperar tierras para los pueblos desató una revolución social a nivel regional. Después, el fracaso de la Convención de Aguascalientes para llegar a un acuerdo entre Carrancistas y Zapatistas elevó la violencia de las hostilidades y la economía cayó en una fuerte contracción acompañada de inflación. El nadir se alcanzó a finales de 1916, momento a partir del cual la situación financiera se estabilizó y la economía inició una firme recuperación no exenta de dificultades.

La visión tradicional, sin excesivo apoyo cuantitativo, sostenía que la economía mexicana había sufrido una paralización completa entre 1910 y 1921 como consecuencia de la revolución. Economistas norteamericanos y mexicanos escribieron sobre la ruina y enorme costo de aquellos años: “dos millones de vidas, destrucción de las líneas de comunicación internas, acumulación de una deuda insostenible, exterior e interior, sobre las espaldas del pueblo mexicano”; además, “el comercio fue trastornado, la industria decayó y los ferrocarriles fueron destruidos”; en suma “la característica del período revolucionario fue la de un perfecto caos”. Pero a raíz de un artículo de John Womack publicado en 1978, que cuestionó esta visión catastrofista y de caos total, se inició un esfuerzo de revisión que ha demostrado que la época de crisis fue no sólo mucho más corta sino que además tuvo un nivel de destrucción más limitado de lo que se creía. Womack admite que la revolución “alteró tan

alcanzado proyectando las tasas de crecimiento anteriores al conflicto armada; por otra parte, el rápido crecimiento del output per capita del período 1870-1900, en torno al 2,1 por ciento, frente al 1,5 por ciento del período anterior, lo atribuía en parte a un proceso de “catching up” inducido por el descenso productivo durante la guerra civil, no sólo en el sur sino también en las principales manufacturas del norte industrializado.

drásticamente la historia económica de México como se supone que la revolución francesa lo hizo con la de Francia o la revolución rusa con la de la Unión Soviética”; también que fue un cambio institucional que “destruyó la vieja organización económica”, rompió la dependencia internacional del país, demolió las haciendas y liberó mano de obra nacionales para su empleo en actividades económicas más eficientes; pero no paralizó ni destruyó la economía del país. Este autor afirma que, pese al desorden y a la violencia “hubo una economía mexicana entre 1910 y 1920”; y que además las condiciones de la producción variaron mucho de una región a otra: la violencia golpeó con fuerza los distritos del norte y del sur centrales, pero menos a la costa occidental, al Golfo y Yucatán y poco a la ciudad de México (¹⁷).

Con posterioridad, Stephen Haber ha abundado en esta misma interpretación, relativizando el impacto económico de la revolución (¹⁸) Para este autor, durante los años de mayor violencia, 1913-1916, no se produjeron grandes destrucciones de fábricas ni de capital fijo; más bien, los ejércitos contendientes se incautaron las propiedades y trataron de conservarlas intactas para emplearlas en su propio beneficio; fueron consideradas como activos estratégicos capaces de generar recursos para subvenir a sus necesidades militares. Los principales problemas surgieron en el ámbito de los transportes y comunicaciones donde se produjo una quiebra del sistema, que desconectó los puntos de suministro de materias primas con los puntos de producción y con los lugares de consumo; la desconexión de los mercados también fue consecuencia de la ruptura del sistema monetario nacional. Aunque Haber admite que las cifras de producción se resintieron insiste que muchas empresas continuaron operando, con buenos resultados contables y distribuyendo dividendos.

Entre los catastrofistas y los revisionistas (optimistas) cabe situar la postura de Fernando Rosenzweig, quien señala que durante la etapa de mayor violencia entre 1913 y 1916, la agricultura de los estados del centro y del norte sufrió graves daños, así como la minas situadas en los teatros de operaciones o en los itinerarios de los ejércitos; la industria padeció por la irregularidad de los transportes y los abastecimientos inciertos; pero en contraste, la extracción de petróleo y las cosechas de henequén crecieron a ritmos nunca vistos en respuesta a la demanda europea y norteamericana; el carácter periférico de las áreas productoras respecto al territorio principalmente afectado por la lucha revolucionaria, situadas en los dos casos en los estados del Golfo, favoreció este crecimiento. Rosenzweig asegura que la recuperación de la actividad económica se inició en 1917, con la nueva Constitución y la consolidación del régimen (¹⁹). Como los datos que, procedentes de estadísticas elaboradas por el Banco de México, nos ofrece este autor son bien expresivas, hemos creído conveniente insertarlas en el cuadro 10.

Haciendo uso de la escasa información cuantitativa disponible (cuadros 11, 12, 13) Enrique Cárdenas (2003) ha realizado recientemente una síntesis apretada de la trayectoria de la economía mexicana durante la guerra civil (1913-1916). Según este autor, el levantamiento contra Huerta tuvo efectos inmediatos sobre el funcionamiento de la economía. El impacto primero lo recibió el transporte ferroviario. El servicio se interrumpió en las zonas de lucha, se destruyeron vías y se derribaron puentes para dificultar el transporte de tropas. También se

¹⁷ Es sabido que en Europa durante aquellos mismos años aumentó de tal manera la demanda de materias primas que permitió a las compañías mineras soportar el alza de los costes y seguir operando con utilidades incluso en medio de las luchas más enconadas; que en muchos lugares la propiedad de bienes rurales y urbanos cambiaron de manos, pero el reparto de tierras apenas alteró el patrón de concentración de la propiedad; que ganó peso el sindicalismo en la mayoría de los sectores manufactureros, en la minería y en el comercio, pero el mercado continuó funcionando; y finalmente que lo más grave que puede decirse respecto a la población es, cuando mucho, que durante ese decenio dejó de crecer.

¹⁸ Haber (1989), cap. 8

¹⁹ Rosenzweig (1989), pp. 11-56)

inutilizaron instalaciones y se dañó el equipo rodante, las locomotoras y los vagones de carga y pasajeros. Los Ejércitos se incautaron las compañías o las sometieron a su servicio. Los ingresos ferroviarios se redujeron de forma drástica. Los suministros de materias primas se hicieron difíciles, causando estrangulamientos para muchas empresas que además perdieron mercados regionales a causa de la segmentación del mercado.

La minería al igual que ocurriera durante las guerras de independencia sufrió muy pronto los embates del proceso revolucionario, del bandidaje y de los robos. La necesidad de recursos económicos de las facciones revolucionarias les llevó a apropiarse de las minas de plata y oro. La producción anual de plata y oro se redujo un 32 por ciento y un 20 por ciento respectivamente en 1913 mientras que la extracción de cobre se redujo en un 35 por ciento. Al año siguiente la contracción fue mucho más severa, a causa del embargo de exportaciones norteamericanas de dinamita y a pesar del aumento de los precios derivado de la guerra mundial. En 1914 la producción se redujo en un 53 por ciento de plata, el 67 por ciento de oro y la de cobre el 92 por ciento. En el sector de la manufactura las dificultades comenzaron al mismo tiempo. Los indicadores industriales no dejan lugar a dudas. La producción metalúrgica se desplomó desde las 155.000 toneladas en 1912 a 8.700 toneladas en 1915, en parte debido a que las compañías ferroviarias interrumpieron sus pedidos. En la industria manufacturera la evolución negativa fue similar: en la producción textil, el refinado de azúcar y la fabricación de cerveza el descenso de la producción fue vertical, afectando a los ingresos y al valor de las sociedades. En el sector exterior también se notaron los efectos de la revolución, si bien de forma menos intensa. Entre 1912 y 1914 la disminución de las exportaciones llegó a un 30 por ciento, arrastrada por la brusca caída de las exportaciones de minerales; el descenso no fue mayor gracias a que las ventas de henequén y café resistieron, así como las ventas de ganado y cuero a los Estados Unidos mientras se mantuvo abierta la frontera. Por su parte, las importaciones se contrajeron aún más (el 56 por ciento) reflejando las dificultades del transporte interno, el acceso a los mercados y el encarecimiento de los productos derivados de la fuerte depreciación del peso.

Como en otros conflictos similares, en México la guerra civil también llevó a un deterioro de la situación monetaria con la consiguiente secuela de inflación y depreciación cambiaria. Tan pronto como Huerta tomó el poder comenzaron sus problemas para allegar fondos con los que combatir los numerosos grupos rebeldes que se levantaron. Acudió a nuevos impuestos, a créditos interiores y exteriores, a esquilmar los fondos del Tesoro y del Fondo Regulador de la Circulación Monetaria. Pero no fue suficiente, pues conforme la lucha continuó a lo largo del año y las fuerzas huertitas tuvieron que extenderse por todo el territorio nacional, los gastos gubernamentales continuaron aumentando. Una medida fue decretar la moratoria en el pago de intereses de la deuda interna y externa, lo cual provocó la animadversión de los acreedores extranjeros, especialmente norteamericanos. Y con la revolución el pánico bancario no tardó en llegar. Ante los rumores de que se establecería un impuesto de guerra sobre las cuentas corrientes, el público acudió a las entidades de crédito a cancelar sus depósitos y a canjear sus billetes por metálico. Ante la falta de liquidez y para evitar la quiebra de los bancos, las autoridades aceptaron de facto la convertibilidad de los billetes: el Gobierno emitió un decreto en noviembre de 1913 suspendiendo la obligación de los bancos de redimir sus billetes en metálico y estableciendo la circulación forzosa de los billetes estatales en cada una de sus demarcaciones. Como la situación, lejos de arreglarse empeoró, el Gobierno tuvo que declarar el 22 de diciembre tres semanas ferias para limitar la retirada de los depósitos bancarios. Más adelante, para detener una crisis bancaria que no hacía sino agravarse con el paso del tiempo, el 7 de enero de 1914 redujo la reserva metálica legal mínima de los bancos del 50 al 33,3 por ciento, lo que de facto salvó a los bancos de la quiebra.

Pero Huerta no era el único que necesitaba dinero. El jefe del Ejército constitucionalista inició la emisión de billetes desde abril de 1913 (emisión de Monclava, de curso forzoso, sin convertibilidad). Los bancos estatales en los territorios bajo control de los constitucionalistas también fueron autorizados a emitir; el papel de los bancos privados y el emitido por el Ejército eran intercambiables, pero pronto surgió un descuento para estos últimos, que en pocos meses llegó al 50 por ciento. La situación se agravó tras la victoria parcial de los constituyentes, cuando Villa-Zapata y Carranza ocuparon la ciudad de México. Las principales entidades bancarias se vieron forzadas a prestar al nuevo Gobierno. La inflación galopante puso a las entidades financieras en una situación muy precaria, al verse obligadas a aceptar devoluciones de sus préstamos en moneda depreciada. Carranza, además, mantuvo una actitud beligerante frente a las entidades financieras, que veía como enemigas de la revolución: confiscó una parte de sus reservas metálicas, les impuso un cien por cien de coeficiente de caja, les castigó con multas por exceso de emisión y les aumentó los impuestos. Carranza además siguió solicitando créditos y suspendió el pago de la deuda. El resultado fue desastroso: se registró una caída en picado de las cotizaciones hasta el 10 por ciento y al final muchas entidades cerraron (18 de los 27 bancos de emisión existentes).

El deterioro de la situación monetaria vinculado a la financiación de la guerra provocó la lógica reacción defensiva del público. La incertidumbre condujo a la desaparición del metálico. En poco tiempo las monedas de oro y después las de plata fueron atesoradas o exportadas, del tal forma que para fines de 1913 el metálico de pleno contenido había salido de la circulación, tal como muestran Cárdenas y Manns (1992). El otro resultado inmediato fue la inflación y la devaluación monetaria (cuadros 14 y 15). El alza de precios comenzó a sentirse con fuerza a partir del segundo semestre de 1914 y el tipo de cambio inició su caída libre. Según el índice construido por Gómez-Galvarriato y Mussachio (2000) a mediados del 1914 los precios habían subido un 14 por ciento. Después la inflación aceleró su paso. El tipo de cambio de los billetes, cualquiera que fuese la serie o el emisor se depreció con rapidez. De los 2,78 pesos/dólar de diciembre de 1913 se pasó a los 5,4 en diciembre de 1914 y a los 17 un año después; la depreciación se hizo más acusada en 1916, donde llegó la cotización a alcanzar los 217,4 a finales del año. Los salarios reales descendieron y las interrupciones del transporte obstaculizaron el suministro de alimentos a las ciudades. De esta forma, incluso a los centros urbanos no afectados directamente por la guerra les llegaron los efectos de la revolución. El hambre se dejó sentir en la ciudad de México desde 1915 y las epidemias se extendieron por todo el país.

Como cabía esperar, la hiperinflación rampante llevó al público a huir del papel moneda de manera apresurada hasta el punto que en diciembre de 1916 compradores y vendedores rehusaron aceptar cualquier tipo de billete como medio de pago. Y fue en ese momento, al hacer inservible el dinero y reducirse drásticamente la cantidad de dinero en circulación, cuando cesó la inflación. En el camino la inflación y la depreciación monetaria habían descoyuntado el sistema financiero y dejado un rastro de desconfianza y de quiebras financieras cuyas graves consecuencias se prolongarían durante muchos años.

Con la entrada triunfal de Carranza en la ciudad de México en agosto de 1915 la violencia empezó a ceder y el reconocimiento del nuevo Gobierno por los Estados Unidos en el mes de octubre contribuyó al restablecimiento del orden, si bien la lucha continuó esporádicamente contra los Villistas en el norte y contra los Zapatistas en Morelos. La economía siguió estancada durante algún tiempo, la inflación no cedió y el hambre se generalizó en muchas ciudades. No obstante, la creciente pacificación y la circunscripción de los combates a Chihuahua y Morelos permitieron la utilización de los ferrocarriles para fines comerciales. Desde finales de 1916 la recuperación comenzó a sentirse en la minería y en diversos sectores de la manufactura, y no sin dificultades la estabilidad monetaria regresó. Los

años de 1917 de 1920, último ciclo de la revolución fueron de franca recuperación. Como señala Cárdenas, la Constitución de 1917, la elección de Carranza como presidente trajeron una relativa paz y permitieron una vigorosa expansión económica. El asesinato de Carranza en mayo de 1920 y la elección de Alvaro Obregón en el mes de octubre dio por terminado el ciclo de la guerra civil y alumbró una nueva etapa de la historia mexicana.

Aunque la revolución mexicana no destruyó el sistema capitalista ni el Estado substituyó al mercado como mecanismo de asignación de los recursos, el conflicto interno no pasó sin dejar cicatrices profundas. La guerra no tuvo efectos catastróficos sobre la economía, pero los costes tampoco fueron pequeños: la caída de la producción en muchos sectores industriales, la inflación, la depreciación monetaria y el desquiciamiento del sistema financiero generó una serie de secuelas cuyos efectos aflorarían con el paso de los años. No se dispone, como para los Estados Unidos, de información sobre el comportamiento del PIB, ni tampoco de un índice industrial moderno, pero con las cifras de Rosenzweig podemos hacernos una idea de lo acaecido: entre 1911 y 1921 la economía mexicana permaneció completamente estancada; el decenio revolucionario contrasta tanto con el rápido crecimiento del último período del porfiriato como con el más moderado avance de los años veinte. Por su parte, los cálculos de Maddison, aunque sin duda defectuosos, confirman lo dicho: el PIB apenas se movió entre 1910 y 1921 y la renta “per capita” era la misma en una y otra fecha. Desde una simple perspectiva económica, la guerra civil y la revolución representaron para México una década perdida de progreso, como mínimo ⁽²⁰⁾

Revolución y guerra civil en Rusia, 1917-1921

La guerra civil en Rusia comenzó con la revolución bolchevique de 1917, cuando Lenin reclamó todo el poder para los soviets y lanzó su programa para erigir un orden socialista nuevo. En enero de 1918 disolvió la Asamblea Constituyente y en el mes de abril firmó la onerosa paz de Brest-Litivsk, la cual fue seguida en todo el país por sublevaciones del ejército zarista y de las fuerzas del antiguo régimen. Después, la intervención de los Aliados contribuyó al alargamiento de una costosa guerra civil en la que la Rusia blanca, sostenida y apoyada por las potencias occidentales, logro controlar una buena parte del territorio. Los alemanes ocuparon Ucrania y el Ejército del zar los Urales, Siberia, el Cáucaso norte y otras regiones importantes; en mayo de 1920 estalló la guerra con Polonia, que se prolongó hasta el mes de octubre, y los estados bálticos se independizaron. Hubo un tiempo durante el cual el Gobierno de Moscú apenas controló una parte de la Rusia central, sin apenas recursos, con tan sólo el diez por ciento de las reservas de carbón, la cuarta parte de los yacimientos de hierro y menos de la mitad de las tierras de cereales. El territorio ruso en manos de los soviets estaba aislado de la mayoría de sus tradicionales fuentes de materias textiles (Turquestán y los estados bálticos), del petróleo, de la cuenca carbonífera del Donets, de los campos de trigo del norte del Cáucaso y de Ucrania; tampoco disponía de las plantas siderúrgicas más modernas y eficientes. A pesar de ello, desde comienzos de 1920 los ejércitos blancos huían en todos los frentes y hacia finales de ese mismo año los bolcheviques lograban alzarse con el triunfo. Para

²⁰ Los datos que proporciona Angus Maddison en 1995, sobre la evolución del GDP mexicano entre 1910 y 1921 son los siguientes:

	PIB (índice	PIB pc (\$ 1990)
1910	98,0	1.435
1913	100,0	1.467
1921	105,5	1.555

entonces, los tres años de guerra habían dejado tras de sí una economía devastada, paralizada y completamente desorganizada y un país exhausto.

El comunismo de guerra fue la estrategia política y económica adaptada por Lenin y sus colaboradores del partido comunista para hacer frente a las dificultades y desafíos derivados del conflicto. Los historiadores Carr y Dobb sostienen que el sistema fue impuesto por la doble confrontación, interior y exterior, a la que hubieron de enfrentarse los bolcheviques; otros autores, por el contrario, mantienen que tal estrategia era consustancial a la ideología comunista, favorable a la intervención del Estado, a la centralización y a la eliminación de los mercados; esto es, se consideró como una fase obligada para la lograr destrucción del orden capitalista ⁽²¹⁾. En diciembre de 1917 se creó el Consejo Supremo de Economía Nacional, VSNJ (Vesenjá), con la misión de organizar la economía y la Hacienda pública, elaborar normas generales, regular y coordinar las distintas actividades industriales. El VSNJ, que tenía amplias facultadas sobre la distribución y asignación de los recursos, dependía del Consejo de Comisarios del Pueblo, y del mismo pasaron a depender todos los sectores nacionalizados. El VSNJ también intervino en el mercado de trabajo: militarizó la mano de obra e introdujo una nueva estructural salarial basada en el “tipo de trabajo”, según su peligrosidad, dureza y dificultad, llegándose a establecer hasta treinta categorías distintas. Como asegura Gatrell, la productividad laboral descendió de forma precipitada desde 1917 y durante los tres años siguientes ⁽²²⁾.

En las áreas bajo control bolchevique, la organización de la economía registró una transformación radical. En noviembre de 1917 se decretó la nacionalización de la tierra; los latifundios fueron divididos y repartidos entre los campesinos; la distribución quedó en manos de los comités locales de soviets, pero la asignación se realizó de forma caótica; cada aldea la llevó a cabo según sus propias reglas y las autoridades perdieron el control, los intereses de los campesinos pobres y los kulaks (campesinos acomodados) chocaron irremediamente y se produjeron fuertes enfrentamientos armados; en algunos casos, el ganado de los terratenientes fue sacrificado y sus casas, graneros y establos destruidos. Al caos y a las crecientes necesidades de abastecimiento del ejército y de las ciudades los bolcheviques respondieron poniendo en vigor en mayo de 1918 un duro sistema de entregas forzosas de las cosechas (prodazverstka); los campesinos naturalmente se resistieron: ocultaron las mieses recogidas o las desviaron al mercado negro; con el tiempo el sistema provocó la reducción de la superficie sembrada y una fuerte caída de los rendimientos agrarios.

Durante la Gran Guerra y la guerra civil la producción agraria sufrió un declive catastrófico. La producción de grano cayó desde 1916, aunque el desastre total pudo evitarse merced al cese de las exportaciones, que se redigieron hacia el mercado interior. En 1920 la cosecha de cereales había disminuido, por la reducción de sembrados y de los rendimientos, al 60 por ciento de la media del período 1909-13. También la cabaña ganadera sufrió importantes mermas; hacia 1922 el número de cabezas de vacuno se había reducido en un 30 por ciento y el de cerda en un 50 por ciento. Las plantas industriales como el algodón o la remolacha azucarera se redujeron aún más; solo las patatas, la fruta y los vegetales se

²¹ Carr (1972); Dobb (1966). Una buena introducción al comunismo de guerra sigue siendo el capítulo 3 de Nove (1969). También el excelente capítulo de Davies (1989). Breves y más recientes síntesis sobre el período por historiadores económicos norteamericanos en Gregory y Stuart (1998), pp. 43-48) y Gregory (1994), pp.81-101

²² Gatrell (1994) achaca el descenso de la productividad a diversas causas tales como la brutal militarización de la mano de obra, la desorganización en fábricas y establecimientos mercantiles, las huelgas, levantamientos obreros, enfermedades, absentismo y agotamiento.

sostuvieron a niveles aceptable. La situación límite llegó al final de la guerra con hambrunas generalizadas ⁽²³⁾.

Los bolcheviques también atacaron la propiedad privada no agraria. En noviembre de 1917 nacionalizaron las principales empresas del sector industrial, los transportes y la banca. Un decreto creó los soviets de trabajadores, con capacidad de supervisar la producción e intervenir en la administración de las empresas. Al pasar ésta a manos de los comités obreros, los propietarios y gestores huyeron o se inhibieron y en muchas fábricas la falta de disciplina y de organización provocó una paralización casi completa de la producción. En 1920 cerca de 37.000 empresas habían sido estatizadas, 4.420 grandes unidades y el resto de tamaño mediano o pequeño, sin mecanizar y a veces con un sólo empleado. Los ferrocarriles y la marina mercante fueron nacionalizados en enero de 1918. El sistema financiero también fue objeto de intervención. El mismo noviembre de 1917, el Banco del Estado fue ocupado por destacamentos armados y poco tiempo después el Estado se incautó todas las entidades de crédito refundiéndolas en el Banco Popular de la República Rusa. En febrero de 1918 fueron expropiados los accionistas y repudiada la deuda exterior. La estatificación también alcanzó al sector comercial; en noviembre de 1918, el comercio privado fue abolido y las relaciones externas fueron asumidas por el Estado. En 1920 los responsables del comunismo de guerra decidieron que el servicio de correos, los transportes públicos y el suministro de gas y electricidad se realizara gratuitamente.

Hacia 1916 se estima que el output superaba en un 20 por ciento el de 1913, debido sobre todo a la expansión de las manufacturas relacionadas con la defensa; por el contrario la producción de bienes de consumo se había reducido. Pero de después de esa fecha, la expansión se paralizó en todos los sectores y fue seguida de un descenso generalizado; en 1920 el output industrial era un mero 20 por ciento del registrado en 1913. La producción de ciertos bienes de capital cesó en la práctica; por ejemplo, la producción de hierro y acero se desplomó a menos del 4 por ciento del nivel de 1913. El descenso en las industrias de bienes de consumo fue incluso más dramático⁽²⁴⁾. La población obrera en la industria se redujo de forma drástica desde los 2,6 millones en 1917 a 1,2 millones en 1920. Puesto que Rusia se encontraba en guerra con todos sus socios comerciales, sus exportaciones se redujeron y la balanza comercial se deterioró hasta extremos inimaginables. Tras la revolución de octubre la ruptura de relaciones comerciales fue completa y el comercio exterior nacionalizado en abril de 1918 desapareció: entre 1918 y 1920 el volumen apenas alcanzaba el uno por ciento de lo que había sido antes de 1913 ⁽²⁵⁾.

La financiación de la guerra planteó problemas irresolubles a los bolcheviques, al reducirse las bases imponibles, colapsar la administración fiscal y desaparecer los mercados financieros. Por prejuicios ideológicos, el Gobierno rechazó subir los impuestos, por lo que faltos de otros mecanismos la guerra fue pagada con masivas emisiones de dinero -en noviembre de 1917 circulaban 20 billones de rubles, mientras que en julio de 1921 había 2,5 trillones de rublos- que provocaron una imparable hiperinflación -los precios aumentaron 8.000 veces- y el derrumbe del rublo. En las transacciones el dinero, en parte por razones económicas pero también en parte por razones ideológicas, tendió a desaparecer, sustituyéndose por meros apuntes contables entre las empresas estatales o por el trueque de mercancías. Desde 1919 los salarios se pagaron en especie y en 1920 hubo un intento de elaborar un presupuesto no monetario. Los intercambios entre el campo y la ciudad terminaron realizándose en especie, al negarse los campesinos a aceptar billetes sin ningún

²³ Wheatcroft and Davies (1994), cap. 6

²⁴ Davies (1994), cap. 7

²⁵ Lewis (1994), cap. 10

valor. Según se generalizaba el truque, la economía tendía a desmonetizarse y a entrar en una fase de economía natural.

Las consecuencias de todo lo anterior son bien conocidas, como se puede comprobar en los cuadros 16 a 18: colapso productivo, industrial y agrario, escasez generalizada de alimentos, materias primas, descenso del consumo, descenso de la inversión, caída de las exportaciones e importaciones, descenso de la productividad y de los rendimientos; en suma una brutal disminución de la renta y de los niveles de vida. Ningún sector de la economía salió indemne y el mercado desapareció sin que ningún mecanismo administrativo eficiente hubiese sido capaz de reemplazarlo. Como consecuencia de la guerra, el hambre y las enfermedades Rusia sufrió una verdadera convulsión demográfica con un exceso de mortalidad de 16 millones de personas. En términos agregados, se calcula que el PIB ruso pudo caer en un 40 por ciento entre 1913 y 1920 y que la economía no logró recuperar su nivel de preguerra hasta 1928 ⁽²⁶⁾.

5. El coste económico de la guerra civil española

Estimar el coste de una guerra puede ser más o menos complicado según lo que se pretenda medir. Puede ser una tarea sencilla de tabulación de algunas partidas contables y de asignación fiscal, o un problema económico de difícil solución. Cuando un conflicto bélico tan sólo exige a una economía el suministro de hombres y máquinas, las cuentas son simples. Pero cuando la guerra implica también destrucción de capital productivo, inestabilidad política que afecta el marco de derechos de propiedad y cambios en la composición de la estructura laboral, los cálculos se complican. Como por lo general, la guerras civiles incluyen todo lo anterior, el ejercicio para conocer sus costes resulta en extremo intrincado. La mera adición de los gastos presupuestarios y del valor de las destrucciones de capital físico y humano no es equivalente al coste total, pues no incluye las pérdidas derivadas del desquiciamiento institucional, las interrupciones comerciales y otros factores económicos y financieros importantes. Quizá sea esta la causa por la que no existen estudios de costes de guerras civiles, disponiéndose tan solo de contabilidad sobre gastos militares y estimaciones de las destrucciones del capital físico.

A efectos meramente ilustrativos hemos querido incluir el gráfico 1 para visualizar lo que podríamos denominar costes directos de la guerra y costes indirectos, cuya suma nos daría la cifra total de las pérdidas derivadas del conflicto. El eje de coordenadas muestra la posible asignación de recursos de una economía y la línea cóncava FPP nos indica la correspondiente Frontera de Posibilidad de la Producción, dados los recursos disponibles y el estado de la tecnología (civil y militar). El punto de partida es SGC (sin guerra civil), una situación para la cual la producción de bienes civiles suma OD y la de bienes militares OA. La guerra supone un desplazamiento a lo largo de la curva FPP hacia el punto CGC (con guerra civil), donde comprobamos como se ha incrementado la fabricación de armamentos, en AB, a costa de reducir la producción de bienes civiles en CD. De hecho, este último segmento, el coste de oportunidad de dedicar un mayor volumen de recursos al sector bélico, nos proporciona una primera medida del coste directo de la guerra. Ahora debemos considerar las destrucciones provocadas por la lucha -pérdidas humanas y materiales- que representamos mediante un desplazamiento hacia dentro de la curva de posibilidades de la producción: hemos pasado de FPP a FPP'. El volumen de bienes militares se mantiene en OB, pero no así el de bienes civiles que se reduce aun más en el segmento EC, que representa el coste adicional consecuencia de pérdidas productivas derivadas de pérdidas en el stock de capital y en el nivel de factores de producción. De esta manera, el coste total directo viene dado por la suma de los

²⁶ Harrison (1994), cap. 3; y Gatrell (1994), cap. 11

segmentos CD y EC; esto es, la distancia ED. En términos contables las partidas integrantes para realizar este cálculo serían los gastos militares incurridos por ambos bandos, el valor de mercado de los bienes físicos destruidos y las pérdidas humanas (muertos y heridos). El cálculo de los costes indirectos es más complejo, pues en rigor requiere replicar una economía hipotética sin guerra civil para el período 1936-39 y comparar el resultado con la economía real. Un camino menos osado sería llevar a cabo una estimación de la producción cesante, algo que si bien es menos riguroso puede ser más factible en el estado actual de nuestros conocimientos y que podría abordarse cuando los estudios por sectores estén finalizados. Hecha esta introducción metodológica, a continuación presentamos las estimaciones y ejercicios contables efectuadas hasta la fecha: se trata de las cifras dadas a conocer en 1963 por la Comisaría del I Plan de Desarrollo; del ejercicio realizado por Paris Eguilaz en 1965 y de los cálculos Velarde (1989) y Sánchez Asiaín (1999).

Los cálculos realizados en 1963 por Comisaría del Plan de Desarrollo, fijaban en concepto de gastos militares de los dos ejércitos una cifra de 300.000 millones de pesetas (a precios de 1962), que representan unos 47.000 millones a precios de 1940, una cifra cercana al PIB de ese mismo ejercicio (52.062 millones) y equivalente a diez veces el presupuesto ordinario de preguerra (4.655 millones de pesetas corrientes); luego añadía una disminución de la población activa en 500.000 hombres y la reducción de las reservas de oro del Banco de España en 510 toneladas brutas (2.500 millones de pesetas). Por lo que se refiere al capítulo de destrucciones físicas, no se registraron grandes voladuras de fábricas y la única ciudad verdaderamente devastada fue Oviedo, mientras que Madrid, afectada en la periferia, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, salvaron la mayor parte de sus instalaciones y edificios; por el contrario hubo unos 192 pueblos y ciudades de tamaño medio que sufrieron daños en un 60 por ciento de sus edificios. Con arreglo a las estimaciones realizadas por la Comisaría del Plan de Desarrollo en 1963, numerosos edificios públicos resultaron totalmente destruidos, así como 250.000 viviendas privadas y otras 250.000 sufrieron daños parciales. Fueron de consideración las destrucciones de carreteras y vías férreas, así como del capital agrario y del utillaje industrial; un parte de la maquinaria se perdió o desvalorizó por falta de reparaciones y por el desgaste a causa de su uso intensivo durante tres años sin proceder a su reposición. En el catálogo de pérdidas también debe incluirse la destrucción del 42 por ciento del parque de locomotoras existente en 1936 (1.309 unidades), el 40 por ciento de los vagones de mercancías (30.040 unidades) y el 71 por ciento de los coches de viajeros (3.708 unidades). La flota mercante redujo su capacidad de transporte en más de un 20 por ciento, terminando la guerra con 225.000 toneladas menos que en 1935⁽²⁷⁾.

Para Paris Eguilaz, “la guerra española ocasionó grandes destrucciones de capital fijo, en el equipo y ganado dedicado a la agricultura, en la industria, transporte, viviendas y edificios, carreteras, puertos, etc, y perturbó fuertemente todo el sistema de producción y distribución”. Según este mismo autor, en el año 1940, la renta nacional a precios constantes había retrocedido al nivel de 1914 y la renta por habitante a cifras del siglo XIX, es decir, que la guerra civil promovió un retroceso económico sin precedentes en la historia española. Con la finalidad de probar su argumento, Paris efectuó un ejercicio simple: suponiendo que la economía española hubiese seguido creciendo desde 1936 al mismo ritmo que durante el período 1920-1935, calculó mediante extrapolación lineal una serie de renta nacional hipotética que comparó con la serie efectiva. El resultado le llevó a concluir que a causa de la guerra la renta efectiva se mantuvo por debajo de la estimada hasta 1954. Durante el

²⁷ Los datos en el volumen I Plan de Desarrollo Económico y Social, 1964-1967 (Madrid, 1963, p. 17). Según Catalán (1995), que ofrece una visión ponderada de las destrucciones causadas por la guerra materiales, aún siendo importantes, no liquidaron el capital físico del país.

cuatrienio 1936-1937-1938-1939 la diferencia acumuladas, como se puede comprobar más abajo, ascendió a un 201 por ciento (²⁸).

La “cuantificación del sacrificio” de Velarde es algo distinta (²⁹). Emplea los datos ofrecidos por Consejo de Economía Nacional en 1945 procedentes de su primera aproximación a la serie de renta nacional. Toma los tres índices de producción física entonces conocidos (hierro y acero; cemento; consumo de energía eléctrica), considerando que la media simple de los índices mide el producto industrial y de servicios. Luego supone que “la caída de las cosechas fue mucho mas fuerte que la crisis industrial y que la crisis de los servicios (medida por el consumo de electricidad), por lo que aplica un coeficiente reductor al índice simple anterior para tener en cuenta la evolución negativa de los años agrícolas. Los resultados de este autor aparecen en el cuadro 19. Velarde sostiene con razón que la situación agraria fue siempre mejor en la zona nacional, mientras que en la republicana la experiencia colectivadora de tierras conllevó una leva pagada en forma de déficit de alimentos y hambruna. Por eso, añade, “la baja en niveles de bienestar material derivados de la brutal caída de la renta nacional se sintió con más fuerza, hasta provocar fenómenos muy graves de desnutrición, en zona republicana”. No olvida que para llevar al coste total debe computarse la liquidación de activos e incorporar a los cálculos los efectos de la guerra sobre la demografía. A continuación añade que, no obstante la caída de la renta, no se registraron “pérdidas intolerables de capital”, ni por destrucciones de fábricas ni por otras pérdidas físicas, nada aparatosas. Toma como ciertas las cifras publicadas por la Comisaría del Plan de Desarrollo y añade el siguiente párrafo sobre pérdidas humanas, que toma de los trabajos de Ramón y Jesús María Salas Larrazábal. Según estos dos autores, murieron 291.500 hombres a causa de la contienda y 165.000 lo hicieron prematuramente por causa de enfermedad; la caída de la natalidad rebajó en 500.000 el número de niños. La población reclusa que en los años de anteguerra oscilaba entre los 12.000 y los 15.000 internos, subió a 270.719 a finales de 1939. Los ejecutados durante la guerra en zona republicana se situaron entre los 70.000 y los 80.000 y en zona nacional en no menos de 35.000.

Para Sánchez Asiaín “la guerra civil significó un alto coste”, en que deben incluirse los gastos militares, la destrucción del stock de capital y la caída de la producción (³⁰). Respecto a las dos primeras partidas toma prestados los datos de la Comisaría del Plan de Desarrollo, por lo que su aportación consiste en utilizar el comportamiento de los componentes del PIB para estimar lo que denomina “producción cesante de los años de guerra”. Repasa los distintos renglones sectoriales del PIB de la misma manera que lo hemos hecho nosotros en el apartado anterior llegando a conclusiones parecidas. Y así, afirma que “concretando un poco más sobre la evolución global de la economía de las dos zonas puede añadirse que el producto agrario fue inferior al de 1935 durante la guerra, situándose en 1939 en el 76,8 por ciento de 1935 y en el 72 por ciento en 1940 según las series del Consejo de Economía Nacional. Para la industria manufacturera también afirma, a partir de las series

²⁸ Los cálculos de Paris Eguilaz eran los siguientes:

Renta Nacional calculada y efectiva durante los años 1936 a 1939. En miles de millones a precios de 1953.

Años	RN calculada	RN efectiva	Diferencias
1936	214,3	192,6	- 21,7
1937	217,0	171,9	- 45,1
1938	219,7	159,9	- 59,8
1939	222,5	147,9	- 74,6

²⁹ Velarde, “La economía de guerra”, pp. 467-473.

³⁰ Sanchez Asiaín (1999), pp. 91-99

sectoriales importantes descensos. Y resume: “Para el conjunto de la economía española existen diversas estimaciones sobre el retroceso experimentado de 1935 a 1940, que van desde un máximo del 28,5 por ciento hasta un mínimo del 11 por ciento, abanico del que creo probable un orden de magnitud de caída del PIB de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento, más próximo quizás al primer porcentaje ⁽³¹⁾. Y si aun no está cerrada la investigación sobre la magnitud del retroceso económico experimentado por España entre 1935 y 1940, menos se sabe sobre la evolución de los años intermedios. A la vista de las diversas informaciones sobre diferentes conceptos, parece razonable pensar que el PIB del año 1936 retrocedió como mínimo una cuarta parte sobre 1935, retroceso que sería ya de un tercio en 1937. A partir de 1938 se inicia una recuperación que sitúa el nivel de producción ligeramente por encima del de 1936, mientras el de 1939 puede ser ya aproximadamente de cerca del 80 por ciento del prebélico, nivel que vuelve a elevarse moderadamente en 1940. La conclusión sería que el país dejó de producir en los tres años de guerra el equivalente aproximado al PIB de un año normal como el de 1935.

A una estimación aproximada de la “producción cesante” también se puede acceder a través de los distintos componentes del cuadro macroeconómico elaborado por Prados de la Escosura. Pero como a la composición de éste y a la evolución de sus partidas nos hemos referido en la primera parte de este estudio, ahora no es preciso detenernos con mucho detalle ahora. De los componentes del gasto los epígrafes que más cayeron fueron los referidos a la inversión y al comercio exterior, con un impacto muy negativo sobre el PIB. El consumo privado también descendió, pero en una proporción menor. La única magnitud con un comportamiento expansivo fue, como es lógico, el consumo público, que recoge el conjunto de los gastos de guerra y muestra al mismo tiempo la reasignación de recursos hacia fines bélicos; y así, frente al 11 por ciento que en 1935 representaba esta partida en el PIB, en 1939 su participación ascendía al 24 por ciento. Por el lado del producto la peor parte se la llevó la construcción, paralizada al suspenderse la inversión residencial y las obras públicas, y los servicios, afectados por la revolución social en el bando republicano, lo que provocó un descenso del 53 por ciento; los otros sectores también sufrieron, aunque las proporciones fueron algo inferiores: con caídas entre 1935 y 1939 del 23, 25 y del 19 por ciento en la agricultura, industria y servicios respectivamente.

Para aproximarnos al conjunto de la economía se han reunido los cálculos que proporcionan Velarde y Prados de la Escosura. Las cifras finales de ambos autores no difieren excesivamente: ambos autores sugieren que la guerra costó aproximadamente entre el 25 y el 30 por ciento de la renta nacional o de producto nacional bruto de 1935. Las diferencias aparecen al observar la evolución anual; según Velarde en los dos primeros años se produjo un verdadero descalabro productivo, recuperado en parte en 1938 y sobre todo en 1939, si bien debe tenerse en cuenta que este año incluye nueve meses de inactividad bélica. Para Prados, la caída más fuerte de la producción se registra en 1936, seguida de descensos más moderados en 1937 y 1938 y sólo cabe hablar de recuperación en 1939, a partir del final de la guerra.

Coda final

Comparando la experiencia española con la conocida para otros países podemos afirmar que la devastación causada por la guerra civil se sitúa a medio camino entre el

³¹ Para el CEN la reducción del PNN entre 1935 y 1940 fue del 28 por ciento; para Velarde del 36 por ciento, del 26 por ciento para Julio Alcaide y de la misma magnitud para Albert Carreras, mientras que José Manuel Naredo da una cifra del 11 por ciento y Prados de la Escosura del 15 por ciento (los porcentajes se toman del libro de Sánchez Asiaín)

desastre ruso y la paralización mexicana. En Rusia la destrucción fue masiva y las pérdidas humanas sin comparación con las habidas en las otras tres guerras civiles. En el extremo opuesto encontramos México, donde el descenso de la producción y el desquiciamiento de su organización económica, aunque graves, fueron menores no sólo de las contabilizadas para el Estado soviético sino de las registradas tanto en Estados Unidos como en España. De las cuatro experiencias, en estos dos países los efectos negativos de sus respectivas guerras civiles ocupan un lugar intermedio y de una magnitud similar por lo que se refiere a costes humanos, financieros y productivos. En cualquier caso, ninguna de las contiendas internas generó beneficios macroeconómicos, sino todo lo contrario: caída de la renta per cápita, desorganización productiva, desmesurados gastos financieros, inflación y depreciación monetaria y profundos cambios en los mecanismos de asignación y distribución de los recursos (fin del sistema esclavista en Estados Unidos, nacionalizaciones e intervención del Estado en México, fin del mercado en Rusia y autarquía y más presencia económica del Estado en España).

Nos queda ahora preguntarnos, para terminar, acerca del impacto a medio y largo plazo de la guerra civil; esto es, interrogarnos sobre la hipotética evolución del PIB sin la interrupción provocada por los tres años de conflicto. ¿Es posible calcular el coste en términos de renta real perdida a causa la guerra civil? ¿Hay alguna manera de estimar el atraso acumulado por la economía española? ¿Podemos llegar a una cifra hipotética del PIB de 1950 si no hubiese triunfado el golpe militar del 18 de julio? Desde luego, responder a estos interrogantes exigiría realizar un ejercicio contrafactual riguroso diseñando un modelo económico dinámico y completo, algo fuera de nuestras posibilidades en este trabajo. Cabe efectuar, sin embargo, una aproximación provisional, lanzar alguna conjetura, proporcionar uno o varios datos interinos. A ello dedicamos los párrafos últimos de este ensayo.

Para hallar nuestra cifra-objetivo, el PIB de 1950 sin guerra civil, hemos llevado a cabo un ejercicio de simulación simple. Consiste en suponer un crecimiento para el período 1940-50 similar al registrado durante el primer tercio de la centuria (el 1,3 por ciento entre 1900 y 1935). Para ello hemos ajustado una línea regresión a los datos reales de 1900 a 1935 con la finalidad de obtener la tendencia y con ella proyectar los datos hipotéticos para la etapa posterior a 1940. El resultado se recoge en el gráfico 2. Con arreglo a nuestros cálculos, si se hubiese mantenido el crecimiento de los primeros treinta y cinco años del siglo, en 1950 el PIB (y nuestro bienestar) hubiese sido aproximadamente un 25 por ciento más alto que el verdadero. Hay que esperar a 1955 para que la línea de la renta real corte a la renta hipotética, lo cual sugiere que fue entonces, quince años tras el fin del conflicto, cuando la economía española alcanzó el nivel que le hubiese correspondido sin guerra civil.

Sin duda alguna no podemos, sin cometer un grave exceso, atribuir a la guerra civil la exclusiva responsabilidad del atraso acumulado por la economía española durante los años cuarenta y principios de los cincuenta. Además de los devastadores efectos del conflicto, es preciso considerar los efectos tan negativos derivados de la política autárquica de aquellos tres lustros³². Separar la incidencia de uno y otra en el actual estado de nuestra investigación resulta complicado. Todo lo que cabe afirmar por el momento es que entre guerra y autarquía, España perdió el ritmo de crecimiento económico que había logrado a partir de 1900, cayendo en una nueva fase de su historia caracterizada por la divergencia con Europa y el mundo desarrollado.

³² Sobre el período autárquico lo más reciente puede consultarse en Barciela (2003)

BIBLIOGRAFIA

Andreano, R.L. (ed, 1967), The economic impact of the american civil war. 2nd ed. Cambridge, Mass: Schenkman Publishing

Avilés, J. (1994), Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española. Madrid, Eudema

Barciela, C. (ed, 2003), Autarquía y mercado negro. El fracaso económico del primer franquismo, 1939-1959. Barcelona, Editorial Crítica

Benet, J. (1999), La sombra de la guerra. Escritos sobre la guerra civil española. Madrid, Taurus

Bolloten, B. (1997) La guerra civil en España: revolución y contrarrevolución. Madrid, Alianza Editorial

Bricall, J. M. (1970 y 1979), Política econòmica de la Generalitat (1936-1939). Vol. I. Evolució i formes de la produció industrial (Barcelona, Edicions 62). Vol II. El sistema financier (Barcelona, Edicions 62)

Bricall, J. M. (1985), “La economía española (1936-1939), La guerra civil española. 50 años después. Madrid, Editorial. Labor.

Cárdenas Sánchez, E. (2003), Cómo se originó el atraso económico de México. La economía mexicana en el largo siglo XIX, 1720-1920. Madrid, Biblioteca Nueva.

Cárdenas Sánchez, E.y C. Manns (1992), “Inflación y estabilización monetaria en México durante la revolución”, en E. Cárdenas (ed), Historia económica de México. México, Fondo de Cultura Económica

Carr, E.H. (1972) La revolución bolchevique, 1917-1923. Alianza Universidad

Catalán, J. (1995), La economía española y la segunda guerra mundial. Madrid, Ediciones Ariel

Cochran, “Did the civil war retard industrialization”, Mississippi Valley Historical Review, 48, 2 (Sep., 1961)

Comín, F. (2002), “La economía de entreguerras, 1914-1935””, en F. Comín, M. Hernández y E. Llopis (2002), Historia económica de España: siglos XIX y XX. Barcelona, Editorial Crítica

Comisaría del I Plan de Desarrollo (1963), I Plan de desarrollo económico y social. Madrid

Davies, R.W (1994), “Industry”, R.W. Davies, M. Harrison and S.G. Wheatcroft (eds), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945. Cambridge University Press

Davies, R.W (1989), “Economic and social policy in the URSS, 1917-1941”, The Cambridge Economic History of Europe, VIII

Davies, E.W., M. Harrison and S.G. Wheatcroft (eds, 1994), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945 . Cambridge University Press.

Dobb, M. (1966), Soviet Economic Development since 1917. London, Routhledge

Engerman, S.L. (1966) “The economic impact of the civil war”, Explorations in entrepreneurial History, 3, 3

Fusi, J. P. y J. Palafox (1997), España: 1808-1996. El desafío de la modernidad. Madrid, Espasa Calpe

García Delgado, J.L y J.C. Jiménez (1999), España siglo XX. La economía. Madrid, Marcial Pons

Gatrell, P. (1994), “The First World War and War Communism, 1914-1920”, R.W. Davies, M. Harrison and S.G. Wheatcroft (eds), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945. Cambridge University Press

Goldin, C. y F. Lewis (1975), “The economic cost of the American civil war”, The Journal of Economic History, XXXV, 2,

Gómez-Galvarriato, A. y A. Musschio (2000), “Un nuevo índice de precios para México, 1886-1929”, El Trimestre Económico, 67.

Gregory, P.R. (1994), An Economic History of Russia from Emancipation to the First Five-Year Plan. Princenton University Press

Gregory, P.R. y R. C. Stuart (1998), Russian and Soviet Economic Performance and Structure. Addison-Wesley

Haber, S. (1989), Industry and Underdevelopment. The Industrialization of Mexico, 1890-1940. Standford University Press

Harrison, M. (1994), “National income”, R.W. Davies, Mark Harrison and S.G. Wheatcroft (eds), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945 Cambridge University Press

Juliá, S. (1979), Los orígenes del Frente Popular en España (1934-1936). Madrid, Siglo XXI.

Lewis, R. (1994), “Foreign economic relations”, R.W. Davies, Mark Harrison and S.G. Wheatcroft (eds), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945 Cambridge University Press

Maddison, A (1995), Monitoring the world economy, 1820-1992. Paris, OECD, Development Centre Studies

Malefakis, E. (1987), “La economía española y la guerra civil”, J. Nadal, A. Carreras y C. Sudrià (comps), La economía española en el siglo XX. Barcelona, Ariel,

Martín Aceña, P. (1994), “Los problemas monetarios al término de la guerra civil”, Hacienda Pública Española. Monografías 2

Martín Aceña, P (2004), “La economía española de los años treinta”, Historia de España. Menéndez Pidal. XL: República y Guerra Civil. Espasa-Calpe

Moradiellos, E. (1996), La perfidia de Albión. El Gobierno británico y la guerra civil española. Madrid, Siglo XXI

Nove, A. (1969), An Economic History of the U.S.S.R. London, Allen Lane The Penguin Press

O’Brien, P.K. (1988), The economic effects of the American civil war. Studies in Economics and Social History. Macmillan

Palafox, J. (1996), “La economía”, S. Payne y J. Tusell (dirs), La guerra civil. Madrid, Ediciones Temas de Hoy

Paris Eguilaz, H. (1965), El desarrollo económico español, 1906-1964. Madrid, Suc. J. Sánchez Ocaña y Cía

Prados de la Escosura, L. (2003), El progreso económico de España, 1850-2000. Madrid, Fundación BBVA

Ransom, R.L. (2001) “The economics of the civil war”, EH Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples , August 25, URL

Rosenzweig, F. (1989), “La evolución económica de México, 1870-1940”, El Trimestre Económico, vol. LVI, 221

Sánchez Asiaín, J. A. (1999), Economía y finanzas en la guerra civil española, 1936-1939. Madrid, Real Academia de la Historia.

Schwartz, F. (1999), La internacionalización de la guerra civil española. Barcelona, Planeta

Tusell, J. (1996), “La evolución política en la zona de Franco”, S. Payne y J. Tusell (dirs), La guerra civil. Madrid, Ediciones Temas de Hoy

Velarde Fuertes, J. (1989), “La economía de guerra”, Historia de España. España Actual. La Guerra Civil. Madrid, Editorial Gredos

Wheatcroft, S.G. and R.W. Davies; “Agriculture” (1994), R.W. Davies, M. Harrison and S.G. Wheatcroft (eds), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945 Cambridge University Press

Womack, J. (1978), "The Mexican Economy during the Revolution, 1910-1920: Historiography and Anlysis", Marxist Perspective, 1

Zugazagoitia, J. (1977), Guerra y vicisitudes de los españoles. Barcelona, Editorial Critica

Cuadro 1. Indices cuánticos del PIB y sus componentes (1929=100)

	Consumo privado 1	Consumo público 2	FBCF 3	Formación de capital 4	Exportaciones 5	Importaciones 6	PIB 7
1929	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1930	90,0	97,1	98,1	97,6	111,1	76,2	95,5
1931	94,0	93,5	67,4	66,7	106,4	63,1	93,2
1932	99,4	100,8	58,3	57,7	113,0	68,1	96,4
1933	94,9	113,1	63,9	63,6	83,3	58,0	93,9
1934	101,7	114,3	63,0	63,6	80,0	61,1	99,5
1935	103,2	120,0	65,3	67,7	75,5	59,5	100,6
1936	60,1	205,5	52,4	56,2	75,1	41,2	75,8
1937	57,1	208,8	38,0	43,7	64,0	27,8	72,0
1938	60,8	186,0	35,0	42,6	57,8	28,8	71,2
1939	69,4	187,8	35,8	44,8	45,4	21,4	78,5

Fuente: Prados de la Escosura, El progreso económico de España, cuadro A7.4

=====

Cuadro 2. Indices cuánticos de los componentes del consumo y la inversión privados (1935=100)

	Consumo de bienes no duraderos 1	Consumo de duraderos 2	Vivienda 3	Construcción no residencial 4	Material de transporte 5	Maquinaria y equipo 6
1935	100	100	100	100	100	100
1936	66	39	79	80	49	97
1937	58	37	56	67	5	78
1938	63	44	56	61	5	71
1939	76	43	56	53	19	76

Fuente: Prados de la Escosura, El progreso económico de España, cuadro A7.1 y A7.2

=====

=====

Cuadro 3. Indices cuánticos del PIB y sus componentes sectoriales (1929=100)

	Agricultura ganadería y pesca 1	Industria 2	Construcción y obras públicas 3	Servicios 4
1936	67	72	82	88
1937	71	64	68	77
1938	67	68	57	78
1939	77	75	71	81

Fuente: Prados de la Escosura, El progreso económico de España, cuadro A3.6

=====

Cuadro 4. Indices cuánticos del VAB en la industria manufacturera (1935=100)

	A	T	MC	Q	M	IT	MT	AGE	Minería
1935	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1936	119	86	49	37	68	74	49	88	65
1937	93	64	50	21	40	41	24	75	44
1938	102	64	50	29	96	89	14	83	77
1939	89	68	51	49	97	87	75	95	83

Notas: A (Alimentación); T (Textiles); MC (Madera y Corcho); Q (Química); M (Metalurgia); IT (Industria transformadora); MT (Material de transporte); AGE (Agua, gas y electricidad).

Fuente: Prados de la Escosura, El progreso económico de España, cuadro A3.3

=====

Cuadro 5. Indices cuánticos seleccionados del VAB en el sector servicios (1935=100)

	Transporte	Comunicaciones	Comercio	Banca y seguros
1935	100	100	100	100
1936	71	80	84	81
1937	47	47	67	57
1938	60	43	65	59
1939	66	63	68	76

Fuente: Prados de la Escosura, El progreso económico de España, cuadro A3.5

=====

Cuadro 6. Indices de precios, 1936-1939

	Deflactor Implícito del PIB	Precios al por mayor Z. naciona	Precios al por mayor Z. republicana
1936	100,0	100,0	100,0
1937	119,3	120,6	546,0
1938	136,7	137,4	1354,1
1939	164,8	140,7	1528,4

Fuente: Prados de la Escosura, El progreso económico de España, cuadro A1.4 y Martín Aceña, “Los problemas monetarios al término de la guerra civil”, cuadro 2.

Cuadro 7. Producción per capita, 1860-1880. En dólares de 1860

<u>Años</u>	<u>Territorios del Sur</u>	<u>Resto del territorio</u>
1860	78	75
1870	48	82
1880	62	106

Fuente: Engerman, “The economic impact of the civil war”, p. 181

Cuadro 8.. Indice de precios y salarios reales durante la guerra civil

Años	Unión		Confederación	
	Precios	Salarios reales	Precios	Salarios reales
1860	100	100	100	100
1861	101	100	121	
1862	113	93	388	35
1863	139	84	1.452	19
1864	176	77	3.992	11
1865	175	82		

Fuente: Ramson, “The economics of the civil war”.

Cuadro 9. Los costes de la guerra civil americana. En millones de dólares de 1860

	SUR	NORTE	TOTAL
<u>Coste directo</u>			
Gastos públicos	1.032	2.302	3.334
Pérdidas de capital físico	1.487	--	1.487
Pérdidas de capital	767	1.064	1.831
Total	3.286	3.366	6. 652
Per capita	376	148	212
<u>Coste indirecto</u>			
Total	2.560	1.149	3.709
Per capita	293	51	118
<u>Coste total</u>			
Directo+Indirecto	5.846	4.515	10.361
Per capita	670	199	330

Fuente: Goldin and Lewis, "The economic cost of the American civil war", tables 1-10

Cuadro 10. Tasas medias de crecimiento anual del PIB en México, 1895-1928

Sectores	1895-1910	1911-1921	1922-1928
Total	2,9	0,7	1,8
Agropercuario	1,6	0,0	1,5
Minería	5,9	- 4,6	13,6
Petróleo	-	43,5	- 13,6
Industria	5,1	- 0,3	5,8
Gobierno	1,0	0,9	2,3
Servicios	2,9	0,0	2,0

Fuente: Rosenzweig, "La evolución económica de México", p.

Cuadro 11. Indicadores industriales mexicanos, 1913-1917

	Azucar	Cerveza	Algodón	Hierro y acero	Cemento
	1	2	3	4	5
1913	125,9	11,7	32,8	46,3	30,0
1914	108,3	3,4	n.d	n.d	25,0
1915	88,5	n.d	n.d	8,7	10,0
1916	49,2	2,8	n.d	37,5	20,0
1917	65,4	4,6	20,3	49,5	30,0

Notas: azúcar, algodón, hierro y acero y cemento, en miles de toneladas; cerveza en millones de litros.

Fuente: Cárdenas, Cómo se originó el atraso económico de México, cuadro VI.2

Cuadro 12. Producción minera, petróleo y henequén, 1913-1917

	Oro	Plata	Cobre	Petróleo	Henequén
1913	25,8	1.726	52,6	25,7	145,3
1914	8,6	811	26,6	26,2	169,3
1915	7,4	713	nd	32,9	162,7
1916	11,7	926	28,4	40,5	202,0
1917	23,5	1.307	50,9	55,3	127,1

Nota: oro y plata en toneladas; cobre y henequén en miles de toneladas; petróleo en millones de toneladas.

Fuente: Cárdenas, Cómo se originó el atraso económico de México, cuadro VI.3

Cuadro 13. Comercio exterior: exportaciones e importaciones. Mill de dólares

	Agricultura	Minerales	Petróleo	Exportaciones	Importaciones
1913	43	42	13	140	76
1914	41	26	12	114	42
1915	41	47	17	137	52
1916	39	59	22	153	83
1917	64	81	32	212	114

Fuente: Cárdenas, Cómo se originó el atraso económico de México, cuadros VI.5 y VI.6

Cuadro 14. Índice de precios

	1913		1914		1915		1916		1917	
	I	T	I	T	I	T	I	T	I	T
Enero	158	149	163		272		1.597		173	
Jun	158	150	156		794		5.708		253	
Dic	161	173	256		1.078		148.489		252	

Fuente: Gómez-Galvarriato, A. y A. Musschio (2000), "Un nuevo índice de precios para México, 1886-1929", pp.

Cuadro 15. Tipo de cambio, 1914-1916 (pesos por dólar)

	1913	1914	1915	1916
Enero	2,04	2,70	6,99	22,73
Junio	2,13	3,02	10,80	77,32
Diciembre	2,22	5,35	16,95	1.630,43

Fuente: Gómez-Galvarriato, A. y A. Musschio (2000), "Un nuevo índice de precios para México, 1886-1929", pp.

Cuadro 16. Indices económicos rusos (1913=100)

Año	Agricultura	Industria	Transporte	Exportaciones	Importaciones
1913	100	100	100	100	100
1920	64	20	22	0,1	2,1

Fuente: Gregory and Stuart, Russian and Soviet Economic Performance and Structure, p. 48

Cuadro 17. Estadísticas de producción rusas

	<u>1913</u>	<u>1920</u>
Producto industrial bruto (índice)	100	31
Gran industria (índice)	100	21
Carbón (mill tons)	29	9
Petróleo (mill tons)	9,2	3,8
Electricidad (mill. Kwh)	2.0	0,5
Lingote de hierro (mil. Tons)	4,2	0,1
Acero (mill. Tons)	4,3	0,2
Ladrillos (mill.)	2,1	0,01
Azúcar (mill tons)	1,3	0.05
Ferrocarriles (mill tons transportadas)	132	39
Producción agraria (índice)	100	60
Importaciones (mill. rublos de 1913)	1.374	208
Exportaciones (mill rublos de 1913)	1.520	20

Fuente: Nove, Historia económica de la Unión Soviética, p. 71

Cuadro 18. Estadísticas rusas durante la revolución

	Producción industrial		Productividad en la industria	Inversión bruta	Balanza comercial
	Gran industria	Pequeña industria			
	1	2	3	4	5
1913-14	6391	2040	2619	327	+131
1917	4780	1600	1860	153	-665
1918	2160	1500	1131	43	- 97
1919	955	1000	746	32	- 3
1920	818	900	620	20	-127

(1) y (2) Millones de rublos, a precios de 1913

(3) En rublos corrientes

(4) Millones de rublos, a precios de 1913

(5) Millones de rublos corrientes

Fuente: Davies, Harrison and Wheatcroft (eds), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945, Appendix

Cuadro 19. Cuantificación del sacrificio (1935=100)

	Indice de la producción industrial y los servicios	Multiplicadores de reducción	Indice de la Renta Nacional
	1	2	3
1935	100	1,00	100
1936	57,6	0,92	53,0
1937	43,1	0,84	36,2
1938	70,3	0,84	59,1
1939	86,8	0,84	72,9

Fuente : Velarde, "La economía de guerra", p.

Cuadro 20. El coste económico de la guerra civil

1929=100	Indice de la Renta Nacional	Indice del PIB	Indice del Producto final
	1	2	3
1935	100	100	100
1936	53	75	68
1937	36	72	72
1938	59	71	68
1939	73	78	77

Fuente: Cálculos realizados a partir de Velarde, "La economía de guerra" y Prados de la Escosura, El progreso económico de España.

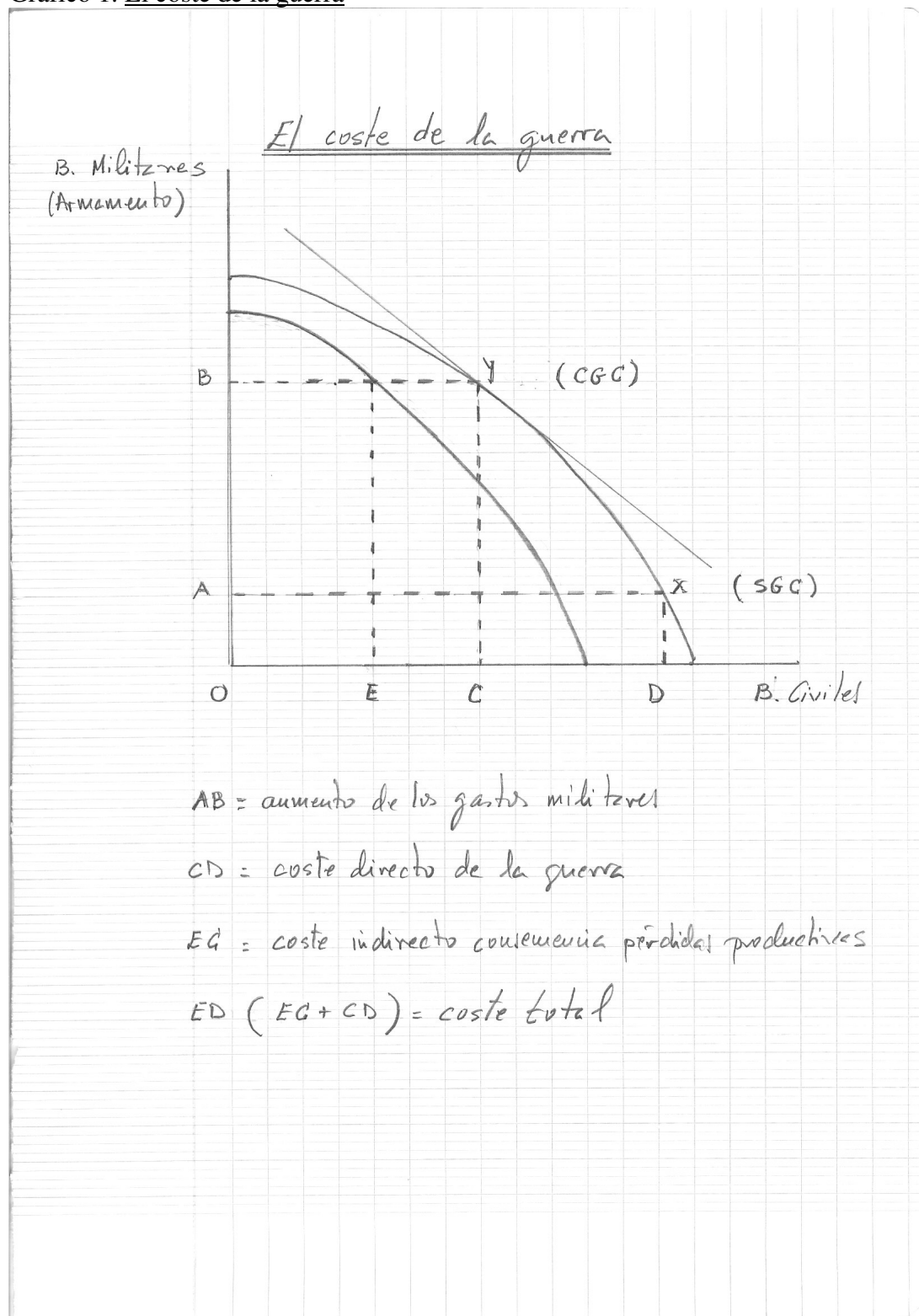
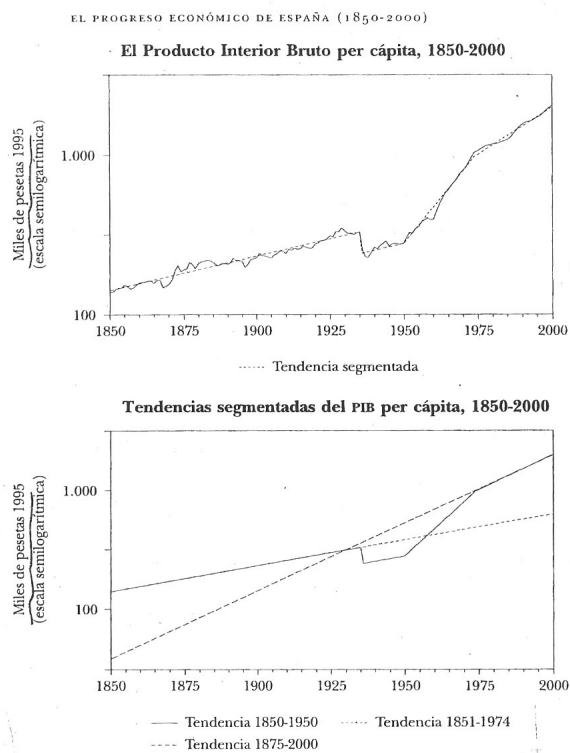
Gráfico 1. El coste de la guerra

Gráfico 2. Evolución del Producto Interior Bruto



Fuente : Prados de la Escosura, El progreso económico de España